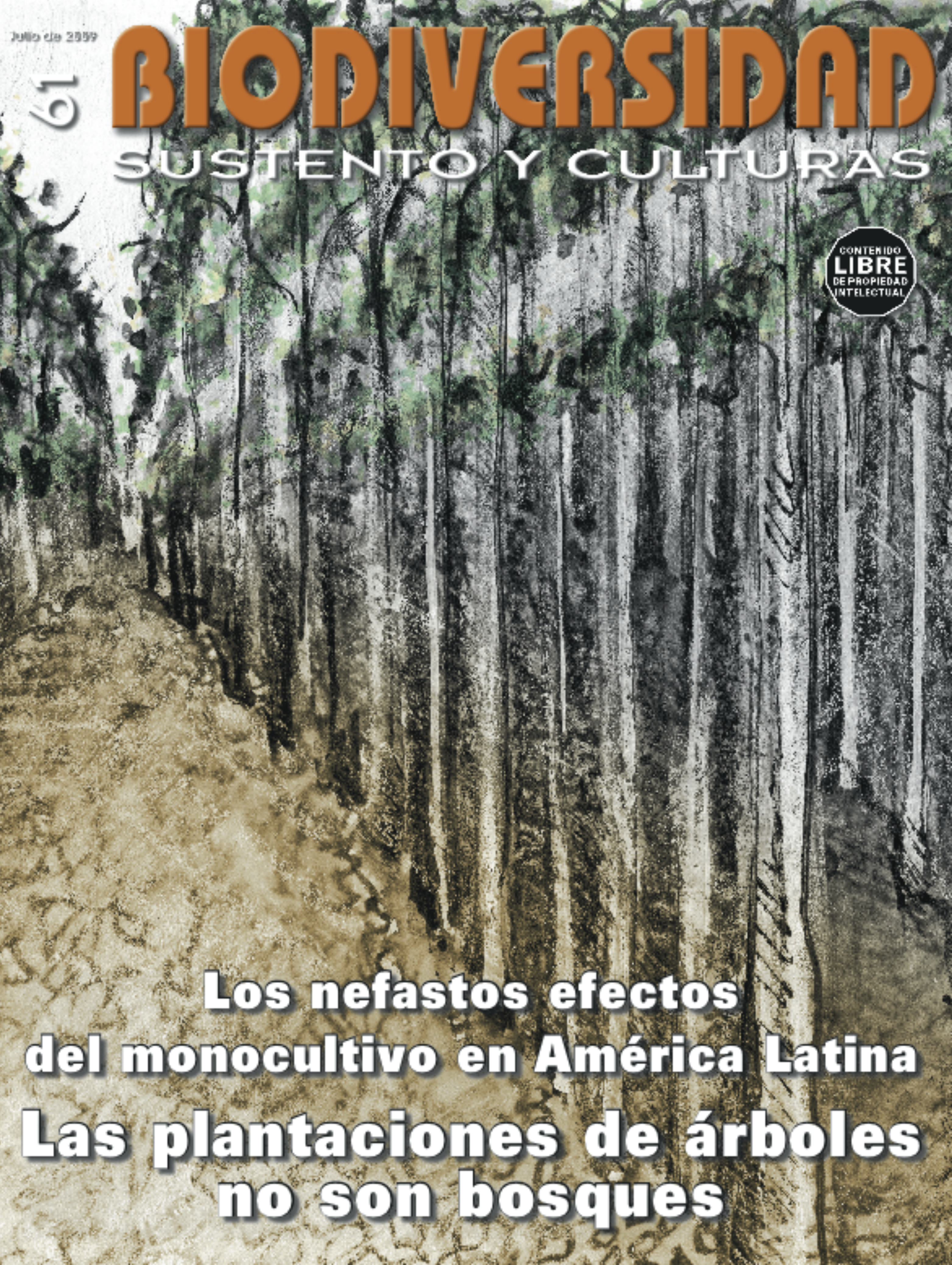

Julio de 2009
61
BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS
CONTENIDO
LIBRE
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Los nefastos efectos
del monocultivo en América Latina
Las plantaciones de árboles
no son bosques

BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS

Número 61, julio de 2009

Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de la biodiversidad, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de la biodiversidad, la diversidad cultural y el autogobierno, especialmente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campesinos, pescadores y pequeños productores.

Organizaciones coeditoras
Acción Ecológica
notransgenicos@accionecologica.org
Acción por la Biodiversidad
agenciabiodla@gmail.com
Campaña de la Semilla
de la Vía Campesina – Anamuri
internacional@anamuri.cl
Centro Ecológico
revbiodiversidade@centroecologico.org.br
GRAIN
carlos@grain.org
Grupo ETC
etcmexico@etcgroup.org
Grupo Semillas
semillas@semillas.org.co
Red de Coordinación en Biodiversidad
rcbcostarica@gmail.com
REDES-AT Uruguay
biodiv@redes.org.uy

Administración
Ingrid Kossmann
ingridbiodiversidad@gmail.com

Edición
Ramón Vera Herrera
constelacion@laneta.apc.org

Diseño y formación
Daniel Passarge, Claudio Araujo
danielpassarge@gmail.com

Depósito Legal núm. 340.492/07
Edición amparada en el decreto 218/996
(Comisión del Papel)
ISSN: 07977-888X

Contenido

EDITORIAL 1

Plantaciones de árboles en América Latina 3

Colombia
Triste historia y triste futuro del negocio de la palma aceitera 8
Desiertos verdes del suroccidente colombiano 12

Desplazamientos involuntarios por los agronegocios en Uruguay 15

Los desastres de la piña en Costa Rica 18

República Dominicana
Tomate industrial en Azua 20

Soya/soja
Las consecuencias inevitables de un modelo genocida y ecocida 23
La supuesta democratización sojera 27

Brasil y los nuevos emporios azucareros 30

DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS 35
Las plantaciones de árboles no son bosques

ATAQUES, POLÍTICAS, RESISTENCIA, RELATOS 23
Perú: tras la vasta movilización amazónica derogan los decretos de ley 1090 y 1064 | Ecuador: el "socialismo del siglo XXI" y la ley de soberanía alimentaria | Ecuador: "ningún proyecto de muerte | el mito de jatropha | comienza el arrebato por tierras africanas | declaración del monte Kenya: la crisis global y las responsabilidad de África | biochar: ponerle gasolina al fuego

Agradecemos enormemente la cariñosa y lúcida colaboración de toda la gente del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y de Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) con quienes tomó forma y profundidad este número. Sin ellos no habría sido posible.

Las fotografías de este número fueron tomadas en Brasil, Argentina, Colombia y México. Las fotos de Colombia las tomó Javiera Rulli en Curvaradó en una misión de observación a plantaciones de palma aceitera en 2007. Las fotos de Brasil son parte del enorme esfuerzo de documentación fotográfica de Leonardo Melgarejo, fotógrafo de *Jornal Brasil de Fato*, y muestran la devastación de las plantaciones de soja y eucaliptos en Rio Grande do Sul. Melgarejo señala que "tras el monocultivo de eucaliptos, la tierra deja de ser útil por muchos años. La zona [de las fotos presentadas] fue ofrecida después como parte de la reforma agraria, pero los campesinos rechazaron estas tierras como lugar para vivir y prefirieron pasarlas negras a la orilla del camino [como ocurre en zonas de Brasil] y esperar otra oportunidad". las fotos de Argentina nos fueron proporcionadas por Eduardo Manuel Sánchez de Amigos de la Tierra Argentina. Las fotos de México las tomó Juan Ignacio Domínguez en Chiapas.

Fe de erratas: Por una lamentable confusión, en la página 37 del número anterior (60) publicamos una foto de Yann Arthus-Bertrand y se la adjudicamos a Carlos Vicente. Ofrecemos una disculpa.

Los dibujos de árboles y plantas fueron hechos expresamente para este número por la artista mexicana Atziri Carranza, quien seguirá colaborando con nosotros. Los dibujos de Rini Templeton [Lucille Corinne Templeton] (1935-1986), pueden consultarse en www.riniart.org. Es la segunda vez que Biodiversidad, sustento y culturas recupera parte su obra, y seguiremos publicando sus dibujos. Fueron tomados del libro de John Nicols, et al, *El Arte de/The Art of Rini Templeton*. México, DF: Centro de Documentacion Rini Templeton y Seattle: The Real Comet Press, 1988.

Las organizaciones populares y las ONG de América Latina pueden recibir gratuitamente la revista. Contactar a REDES-AT Uruguay: *biodiv@redes.org.uy* / *http://www.grain.org/suscribe*

Les invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus experiencias, sugerencias y comentarios. Dirigirse a Ingrid Kossman *ingridbiodiversidadla@gmail.com* Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por favor envíennos una copia para nuestro conocimiento.

Agradecemos la colaboración expresa de la Fundación Siemenpuu para este número especial sobre monocultivos y plantaciones de árboles y sus efectos sobre el ambiente y las comunidades, en colaboración con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y el caribe (ATALC). Agradecemos también la colaboración de la Cooperación al desarrollo de la Consejería de la Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Biodiversidad fue declarada de interés público por el Concejo Deliberante del Municipio de Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina.

Editorial

Esta vez no mostramos aquí lo que retrata la portada sino un bosque con la primera luz de la mañana impactando los huecos entre los árboles. La portada en cambio retrata una plantación, que quisimos dibujar para realzar su factura, su antinaturalidad.

Las plantaciones de árboles no son bosques. Se ha dicho y se repite hasta el cansancio. Por eso en la portada vemos el interminable horizonte que asociamos con los monocultivos, sean de árboles o de cultivos industriales. Desiertos verdes, dicen en Brasil, en Uruguay. "Soldados plantados" dicen con un dejo irónico los legendarios mapuches de Chile y Argentina, defensores desde hace siglos de sus territorios y sus bosques —de la invasión de terratenientes que imponen monocultivos de árboles y una vida injusta en todos los órdenes.

Las plantaciones de árboles no son bosques porque en los bosques todo vive.

Los bosques son un tejido de tiempos, flujos, tamaños, escalas. Son enclaves de diversidad manifiesta y la potencialidad de todo su tejido; presencias naturales y sobrenaturales, especies biológicas y saberes ancestrales que se conjuntan para darle sentido a todo eso que en varios planos vive: manantiales, arroyos, torrentes, animales, bacterias, hongos, un sinfín de plantas de todos tamaños, nutrientes de los suelos y muchos árboles. Un complejo sistema de temperaturas y humedades que propicia la regeneración continua. Para decirlo con el filósofo John Berger, lo más importante es el "entre-bosque".

Foto: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Bosque en Costa Rica

> Un bosque es lo que existe entre sus árboles, entre su densa vegetación secundaria y sus claros, entre sus ciclos de vida y sus diferentes escalas de tiempo —que van de la energía del sol a los insectos que viven por un día. Un bosque es también un lugar de encuentro entre los que lo penetran y algo innombrable y atento que espera tras un árbol o en el matorral… lo intrincado de las veredas que se entrelazan, de las energías que cruzan en un bosque —los rumbos de los pájaros, los insectos, los mamíferos, las esporas, las semillas, los reptiles, los helechos, los líquenes, los gusanos, los árboles, y un sinfín más— no tiene comparación… Cada una de las energías que cruzan opera en un bosque con su propia escala de tiempo. De la hormiga al roble. Del proceso de la fotosíntesis al proceso de la fermentación.*

En cambio, las plantaciones de árboles son lugares de existencia artificial, industrializada. Lo homogéneo es rampante, asfixiante. Al ser áreas diseñadas (fábri-

cas agrícolas), sus especies y estructura están drásticamente simplificadas para producir sólo unas cuantas mercancías: madera, leña, resina, aceite, frutas, ¿combustible? No hay animales, no hay vegetación secundaria, no hay tramados, pero sí agrotóxicos suficientes para envenenar áreas extensas. Como dicen los mapuches: "Debajo de las hileras de árboles plantados no crece nada. Tampoco es un lugar que elijan los pájaros para anidar, ni ningún animal. Estas plantaciones no sólo expulsan al ser humano, sino también al resto de la naturaleza. Estos árboles tienen que ver con la baja del caudal de los ríos".

Y hoy nos amenazan con que producirán combustibles agroindustriales, o materia prima para quemarla y que produzca un carbón que hoy pomposamente llaman "biochar" que los ingenieros [y los incautos] alegan que pasará al suelo y salvará la humanidad disminuyendo mágicamente el calentamiento global. Y la paradoja es que son las plantaciones las que contribuyen al calentamiento global, a la destrucción de las cadenas, ciclos y tejidos de vida, agotan el agua y los nutrientes, aumentan la salinidad y la acidez de los suelos. Ahora, los árboles transgénicos pueden exacerbar tales problemas y provocar graves colapsos. Se han creado incluso árboles transgénicos que son una amenaza aun mayor, pues su diseño genético incorpora un componente insecticida que podría erradicar muchas especies de insectos esenciales para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas.

Este número lo hemos dedicado a documentar los efectos nocivos de los monocultivos de árboles (pino, eucalipto o palma africana), y la devastación que conllevan los monocultivos en general. En este número discutimos la caña de azúcar, la piña, el tomate y una de las más terribles siembras industriales conocidas: la soja o soya, que se expande impresionante por vastas regiones que hoy se conocen como "la república de la soja" y que va de Bolivia a Paraguay, Brasil, Argentina y hasta Uruguay.

Documentamos la devastación, pero también los intereses que se mueven tras este empuje por emparejar y destruir como manera de hacer ganancias. Tal vez nos habría gustado incursionar en las tretas conocidas de la industria papelera o de las famosas ofertas de bonos de carbono —en realidad sistemas que venden a las grandes empresas el permiso de contaminar, de emitir dióxido de carbono. Decir permiso suena leve: son casi lo mismo que las antiguas indulgencias religiosas —pagar con dinero por los pecados, en este caso de contaminación, para quedar libres de ellos. Los bonos de carbono son en realidad "derechos de contaminación" y en la bolsa de valores suben o bajan según a las reglas sabidas del mercado.

Nunca sobrará hablar de la expansión de las plantaciones de árboles de rápido crecimiento (a costa de praderas, tierras agrícolas, bosques y selvas) para convertirlos en celulosa, madera o combustibles agroindustriales.

Así, insistimos. Las plantaciones de árboles no son bosques. Los monocultivos (siempre industriales por naturaleza) no son cultivos: son fábricas agrícolas. La transgresión brutal de las escalas humanas y del tejido de ciclos y procesos que son la vida, siempre entraña pérdidas terribles e injusticias que hay que combatir.

BIODIVERSIDAD

* "Mirando cuidadosamente" en *Con la esperanza entre los dientes*, Ítaca-*La Jornada*, México, 2006.

Plantaciones de árboles en América Latina

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Las plantaciones de árboles a gran escala se están extendiendo en prácticamente todos los países de la región. Estas plantaciones, ya sean para celulosa, madera, aceite, combustible u otros objetivos están implicando una serie de graves impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades locales.
El tipo de plantación que es un creciente problema está caracterizado por ser un monocultivo, por su gran escala y su uniformidad: decenas o centenares de miles de hectáreas de una sola especie plantadas en bloques homogéneos de la misma edad.
En nuestra región se dan fundamentalmente tres tipos de tales monocultivos: de pinos, de eucaliptos y de palma aceitera, que por sus características se pueden agrupar en dos: plantaciones madereras y aceiteras.



Plantaciones madereras

Están basadas en una sola especie (usualmente eucalipto o pino), seleccionadas por su rápido crecimiento, uniformidad y alto rendimiento de madera. Consistentes en bloques de la misma edad, requieren una preparación intensiva del suelo, fertilización, espaciamiento regular, selección genética, clonación, eliminación de plantas competidoras mediante métodos mecánicos o químicos, uso de agrotóxicos y cosecha mecanizada en rotaciones cortas.

Estos monocultivos a gran escala se están promoviendo en toda América Latina, donde el rápido crecimiento de los árboles, el bajo precio de la tierra y de la mano de obra se combinan para que la madera resulte especialmente barata. A medida que los bosques, praderas y suelos agrícolas son invadidos por estas extensas plantaciones, los resultados se traducen, país tras país, en empobrecimiento, expulsión rural, degradación ambiental (suelo, agua, flora, fauna, paisaje) y creciente oposición a nivel local. Como hecho agravante adicional, se ha constatado que las plantaciones impactan desproporcionadamente la vida de las mujeres (ver más información sobre impactos en el cuadernillo adjunto).

Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles. La actual expansión de los monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.

Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como "bosques" y desde entonces dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus destruc-



"Plantación-código de barras", de Stig (www.shtig.net) para el informe *¿De quién es la naturaleza?,* del Grupo ETC (www.etcgroup.org)

Los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la "forestación" tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta

tivos monocultivos bajo el ropaje verde de la "plantación de bosques".

En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, FMI, BID, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.

Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación.

Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la "forestación" tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta.

Nuevos mecanismos de promoción. Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la "forestación" a gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a "compensar" sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los "bonos de carbono" se constitu-

ye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.

A su vez, el nuevo negocio de los agrocombustibles constituye otro aliciente para la promoción de la "forestación" a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile.

La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas: el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil (Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en el uso de las palabra "floresta" o "forest" (bosque) en los propios nombres de los esquemas, incluido el término "forestación". Es decir, que para estos esquemas de certificación las plantaciones son "bosques". A partir de esa y otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el carácter destructivo de las mismas.

Plantaciones de palma aceitera

Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera —también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos.

Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona.



Crecimiento sobre los tocones de eucalipto en una antigua plantación. Rio Grande do Sul, Brasil.
Foto: Leonardo Melgarejo

Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.

Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de pobla-

ciones indígenas, afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, como se constatado en particular en Colombia.

En casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.

Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.

Explotación y contaminación industrial. A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (muchas veces mujeres).

Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento.

Los motores del avance de la palma. Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad.

La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte.

Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector.

A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos, jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones.

El necesario maquillaje verde. Las reiteradas denuncias de los graves impactos sociales y ambientales de este cultivo —y el resultante cuestionamiento de los consumidores— forzaron a la industria a iniciar un proceso denominado Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable (Roundtable on Sustainable Palm Oil-RSPO).

La RSPO cuenta entre sus miembros a empresas muy conocidas, normalmente asociadas a impactos sociales y ambientales negativos, como Cargill, Unilever, Cognis, Corporación Financiera Internacional, British Petroleum, Syngenta, Bayer.

El proceso de la rspo ha sido duramente rechazado por organizaciones de todo el mundo como "otro intento más de 'lavado verde' de la agroindustria", ya que no es posible que un modelo de monocultivos a gran escala, que destruye los medios de vida de las poblaciones locales —llegando incluso a su expulsión y represión— y que tiene graves impactos en aguas, suelos, flora y fauna pueda recibir un sello que certifique su "sustentabilidad".

21 de septiembre:
Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles

A partir de una iniciativa de la Red contra el Desierto Verde de Brasil, en el año 2004 se escogió el 21 de septiembre —Día Nacional del Árbol en ese país— como fecha significativa para conmemorar a nivel internacional la lucha contra los monocultivos forestales.

Desde entonces, se suman cada vez más organizaciones e individuos llevando a cabo distintas actividades en el mundo entero para oponerse a la expansión de los monocultivos de árboles a gran escala.

Quien quiera sumarse a dicha iniciativa puede contactarse con el secretariado de la Recoma (Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles): recomala@gmail.com

El crecimiento de la resistencia

El destructivo avance de los monocultivos de árboles ha hecho inevitable el surgimiento de procesos de resistencia. Es así que en Brasil, país que cuenta con al menos 6 millones de hectáreas plantadas (principalmente con eucaliptos) ha surgido una red llamada Alerta Contra el Desierto Verde, que agrupa a una amplia gama de organizaciones indígenas, de afrodescendientes, campesinas, de agricultores sin tierra, sindicatos, académicos, ambientalistas, etcétera. Más recientemente, en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul en particular) ha surgido un fuerte movimiento (MoGDeMA) contra el avance de los monocultivos. En el caso de Chile (con más de dos millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptos), el movimiento opositor ha tenido como principal protagonista al pueblo mapuche, gran parte de cuyo territorio fue violentamente usurpado por las empresas plantadoras. En Uruguay (con 1 millón de hectáreas plantadas) se creó una Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación. En Ecuador existe un fuerte movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes, aliado a organizaciones ambientalistas, que se opone al avance plantador, tanto de pinos y eucaliptos como de palma africana. En Colombia y Venezuela hay una larga historia de luchas, en particular contra las plantaciones madereras de la empresa Smurfit Kappa Cartón, de capitales irlandeses y holandeses.

A su vez, Colombia ha sido el escenario de atroces matanzas y migraciones forzadas vinculadas a la palma aceitera y de la heroica lucha actual de comunidades locales para recuperar sus territorios. Costa Rica también cuenta con una larga tradición en materia de luchas contra los monocultivos de árboles. En otros países la oposición organizada es aún incipiente, tal como en los casos de Argentina, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de los países de Mesoamérica, pero en todos los casos ya existen organizaciones trabajando para evitar la instalación o expansión de plantaciones y coordinando actividades con los demás países de la región. Uno de los mecanismos para dicha coordinación es la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (Recoma), que incluye a organizaciones de todos los países de la región.



Plantación de eucaliptos, Rio Grande do Sul, Brasil.
Foto: Leonardo Melgarejo

En Brasil, país que cuenta con al menos 6 millones de hectáreas plantadas principalmente con eucalipto, ha surgido la Alerta Contra el Desierto Verde, una amplia gama de organizaciones indígenas, de afrodescendientes, campesinas, de agricultores sin tierra, sindicatos, académicos, ambientalistas

Triste historia y triste futuro del negocio de la palma aceitera

Héctor Mondragón



Curvaradó, Colombia. **Foto:** Javiera Rulli

Despojo y superexplotación. La palma aceitera llegó a Colombia en manos de grandes propietarios que se aprovecharon de la tierra acumulada en regiones como el Magdalena Medio, después del gran desplazamiento de campesinos que causó la violencia de 1946 a 1958.

Las empresas de palma, de las cuales la principal era Industrial Agraria La Palma, Indupalma, de la familia Gutt, impusieron la superexplotación de los trabajadores. Los sindicatos lograron dar las primeas peleas por sus derechos y la respuesta fue la represión, la ilegalización de las huelgas y los consejos de guerra contra los dirigentes. En septiembre de 1971, le adjudicaron a los líderes sindicales el asesinato de un jefe de personal de Indupalma, mediante un montaje, por lo que permanecieron en la cárcel cuatro años hasta que lograron demostrar plenamente su inocencia (Edgar Caicedo, *Historia de las luchas sindicales en Colombia*. Ediciones CEIS, Bogotá, 1985, p. 196)

En 1977 la huelga en Indupalma estuvo rodeada de circunstancias dramáticas por la injerencia del grupo guerrillero M-19 que secuestró al gerente y exigió la firma del convenio colectivo con los trabajadores, divulgado el 14 de septiembre, día de la huelga general que se denominó en Colombia "Paro Cívico Nacional" (Caicedo 1985, p. 245).

La primera etapa de la palma aceitera en el país culminó con el fin del ciclo productivo de las primeras plantaciones: las empresas declararon entonces quiebras ficticias para desconocer los derechos económicos de los trabajadores y destruir a los sindicatos. Cuando algunos trabajadores quisieron recibir las tierras de las empresas como sueldos y prestaciones que no les habían pagado, se dieron cuenta que limpiar una tierra con palmas altas y viejas es más caro que comprar otra tierra y deja daños permanentes en el suelo.

En tierra de otros. Por la experiencia de 30 años, las empresas de todo el mundo prefieren ahora cultivar en tierras ajenas, o mejor dicho dañar tierras ajenas, lo cual además les permite evadir impuestos prediales y establecer supuestas "alianzas estratégicas" o "asociaciones productivas" con los campesinos e indígenas que entregan la tierra, de modo que además de darles sus tierras les den su mano de obra sin contrato de trabajo, como supuestos "socios".

La mayoría de los trabajadores dejó los sindicatos y tuvo que conformar "cooperativas de trabajo asociado", establecidas, como en el caso del azúcar, para desconocer el contrato laboral, aparentando un contrato entre la empresa y la cooperativa. La empresa ya no paga la seguridad social de los trabajadores, quienes deben buscarla en los sistemas públicos de asistencia a la población pobre como el Sisbén de Colombia y quedan sin cesantías ni jubilaciones.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), estas plantaciones son "un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra". La ACVC agrega: "Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales

plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos 'dada su experiencia'. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la 'economía campesina de la palma'. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos" (WRM, "Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera". Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, boletín 47, Montevideo, 2001).

Las empresas lograron una situación excepcional al evadir el costo de la tierra y los impuestos, reducir sustancialmente los salarios y eliminar el pago de prestaciones sociales. La sociedad asume el costo ambiental de la explotación de palma, mientras las empresas se embolsillan los beneficios.

Las transnacionales comercializadoras y consumidoras del aceite vegetal, como Unilever, decidieron convertirse en las principales beneficiarias propiciando la plantación de palma aceitera en todo el mundo tropical: comenzaron por Malasia e Indonesia y hoy las plantaciones se extienden a Camerún, Nigeria y otros países de África, Centroamérica y Sudamérica, lo que condujo a una tendencia a la baja de los precios internacionales del aceite, que beneficia a esas transnacionales.

Los desastres ecológicos fueron grandes en las selvas, especialmente en Malasia e Indonesia. La situación más grave se presentó en 1998 cuando una nube de humo cubrió estos países, producto de la quema de los bosques. Mientras tanto los pueblos indígenas, especialmente en la isla de Borneo, eran los damnificados directos de la destrucción y el despojo de sus territorios.

Ahora, cuando el negocio de la palma venía en declive, el alza extraordinaria de los precios del petróleo le da un nuevo impulso a los plantadores de palma aceitera. Se espera multiplicar las plantaciones para producir biodiesel. El negocio se pinta como el más extraordinario de la historia y hasta se asegura que tendrá magníficos efectos ecológicos.

Para los países y regiones productoras, los efectos pueden llegar a ser muy negativos. Sufrirán la destrucción del bosque y la vegetación nativa, reduciendo la biodiversidad; los suelos sufrirán en cuanto cada plantación de palma cumpla su ciclo productivo y se deba eliminar los troncos por métodos químicos; si las plantaciones se expandieran como se pretende, lo harían en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, porque los agricultores dejarían de producir cultivos alimenticios para la población y en cambio se concentrarían en producir "combustibles limpios" para Estados Unidos y Europa (Elizabeth Bravo y Mae-Wan Ho, "Las nuevas repúblicas del biocombustible", *Red del Tercer Mundo* 30, Montevideo, 12 de junio de 2006).


Foto: Javiera Rulli

Palma aceitera y paramilitarismo. En Colombia los megaproyectos de palma aceitera, como otros, han estado estrictamente asociados a la expansión del paramilitarismo. La rápida concentración de la propiedad de la tierra entre 1981 y 2006 ha tenido objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan. Pero la palma les ha ofrecido el pretexto y negocio adecuado para apoderarse de tierras de campesinos y especialmente de afrocolombianos.

Los paramilitares colombianos han seguido el modelo de la mafia calabresa denominada *'ndrangheta*, que consiste en Italia en la expropiación mafiosa: la coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar, la apropiación de los subsidios de la Comunidad Europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva, y la apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales (Frank Furet, "La 'Ndrangheta", *Banc Public* 126, Bruselas, enero de 2004). La convergencia entre las AUC y la mafia calabresa no es una casualidad. Objetivos y métodos coinciden. Pero lo que en Italia es mafia tradicional relegada a la ilegalidad por el desarrollo capitalista que puede utilizarla, pero no la reconoce como suya, en Colombia es parte esencial del sistema de tenencia de la tierra que sigue vigente desde la conquista española y que desplaza violentamente una y otra vez al campesino a las selvas, convirtiéndolo en colono y en ocupante de territorios indígenas.

En el modelo agrícola de la mafia calabresa, al despojo de tierras valorizables se agrega el apoderamiento de los subsidios agrícolas de la Unión Europea y en especial los destinados a los olivares. En este caso también lo que en Italia es mafia aquí se desarrolla como virtud en la forma de capitalismo burocrático. Reciben los créditos del Banco Mundial, los subsidios del Estado, las exenciones de impuestos "para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial", subordinando a los pequeños productores a estos proyectos si quieren recibir el subsidio: el subsidio aparentemente entregado a los pequeños, fluirá realmente para proyectos empresariales, de "los empresarios eficientes de San Alberto" de que hablaba el presidente Uribe en la campaña electoral.

La patente colombiana de este procedimiento capitalista burocrático la tiene el olivo del trópico, la palma aceitera. El negocio para el "empresario" es ideal: no tiene obligaciones laborales porque los trabajadores son socios; si los trabajadores campesinos han recibido tierra o si han entregado su tierra, tampoco tendrá el empresario que pagar impuesto predial; y para completar, como el precio internacional del aceite tiene una tendencia a la baja, el "socio" campesino corre con las pérdidas, incluido el grave deterioro del suelo. Es la experiencia de Malasia. Finalmente el pequeño pierde una tierra que ya no valdrá para la agricultura ni para él, pero sí para los proyectos de inversión no agrícolas de los socios mayores.

En la situación colombiana la rentabilidad de las plantaciones de palma adquiere un sentido diferente, en la medida en que en varias regiones la expansión de la palma está ligada con la economía de la cocaína y la inversión inicial en viveros y años de espera para producir es posible gracias a la preexistencia de grandes capitales acumulados en el narcotráfico o de pequeños ahorros fruto de la producción de coca. En este sentido la expansión de la palma ha resultado una forma eficiente de lavar dinero bajo la protección y el fomento estatal e internacional. Si por lo menos esto fuera dirigido a sustituir definitivamente la economía de la cocaína, tendría al menos ese efecto positivo, pero el dominio de ambos negocios por el paramilitarismo articula ambos negocios en uno y los liga al despojo de las tierras de los afrocolombianos y otras comunidades rurales. Sin embargo, esta máquina sigue siendo fomentada por el Estado colombiano y la "comunidad internacional".



Foto: Javiera Rulli

La legislación a favor de la palma aceitera y otras plantaciones abunda. Están exentas de impuesto de renta según la Ley 939 de 2004 y el Decreto 1970 de 2005. Según la Ley 939 el biodiesel está exento del impuesto a las ventas y del impuesto al ACPM [aceite combustible para motor]. El Plan Colombia y el Banco Mundial han establecido programas de fomento de la palma aceitera. Proyectos de ley actualmente en curso, prevén subsidios e inversiones estatales.

Plan Pastrana. El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana ofreció el 1 de marzo de 2001, en Malasia, tres millones de hectáreas para cultivar en Co-

lombia palma aceitera. El proyecto que el mandatario presentó a empresarios malasios congregados en la conferencia organizada por la Asian Strategy Leadership Institute (ASLI), buscaba ser desarrollado con inversión del país asiático.

"La extensión de los cultivos de palma de aceite se ha convertido en un verdadero propósito nacional, para que, con ella, lleguen el progreso, la inversión y el desarrollo social a amplias zonas de Colombia que hoy están listas para unirse al cultivo y el procesamiento de este bien primario", dijo.

El desarrollo de estos macroproyectos, a los que ofreció vincular inversiones de Malasia, se haría con núcleos de producción de al menos 20 mil hectáreas, cada uno con planta de beneficio para extractar el aceite. La inversión por cada núcleo se estimó en 70 millones de dólares para ejecutar principalmente a través de la Promotora de Proyectos de Siembra de Palma de Aceite, Propalma SA, en la cual participan 43 empresarios del sector, Proexport y Coinvertir.

Pastrana gestionó con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera, y de las ocho zonas seleccionadas para el programa cinco eran de dominio de los grupos paramilitares (Urabá, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centronorte del Meta) y en una zona había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas-norte del Tolima-noroccidente de Cundinamarca).

En 1998, en Colombia había 145 mil hectáreas sembradas de palma y actualmente hay más de 300 mil, un crecimiento superior al 100%. A pesar de la política de las empresas procesadoras de no ser las propietarias de las tierras de plantación, éste es un cultivo de gran propiedad y de hecho una tercera parte está en fincas de más de dos mil hectáreas y otra tercera parte en fincas de entre 500 y dos mil hectáreas. El control paramilitar y la represión política han logrado que no se presente la organización diferenciada de empresas procesadoras y proveedores y todos se agrupan en Fedepalma.

Proyecto Gaviotas 2. El Proyecto Gaviotas 2 que tanto ha promovido Uribe, se relaciona en realidad con megaproyectos de origen japonés, previstos hace 30 años y que incluyen la privatización del río Meta y la apropiación de extensos territorios de Meta, Casanare y Vichada. Una etapa preparatoria de 30 años la cumplieron los paramilitares que concentraron la propiedad en pocas personas aunque aún tienen el obstáculo de los resguardos indígenas a los que proponen entregarles 600 mil hectáreas.

El megaproyecto cubriría tres millones de hectáreas con palma aceitera y pino caribe. Su impacto ecológico sería enorme. Desgraciadamente empresarios españoles y de la Unión Europea se han ligado a este plan.


Atziri Carranza

El gobierno espera ligar este proyecto con la reinserción de los paramilitares y convertirlos en fuerza de doble papel: mano de obra barata y disciplinada y control político-militar de la frontera con Venezuela.

Cuando el precio del biodiesel caiga, la ecología que permite la vida indígena se habrá roto, y la región quedará en manos de los de siempre.

Resistencia. Tres son las fuentes de resistencia contra estos proyectos. La resistencia de los trabajadores, tanto la reducida vanguardia que con gran sacrificio y lucha han mantenido sus organizaciones sindicales, como aquéllos que se han visto obligados a constituir "cooperativas" y que, como se demostró en enero de 2005 en Cesar, también pueden hacer huelgas exitosas y voltear contra los empresarios la ficción de la ausencia de contrato de trabajo, pues sus huelgas no pueden ser declaradas ilegales. La resistencia de indígenas, afrocolombianos y campesinos que defienden sus territorios y derechos fundamentales. El movimiento ambientalista internacional que en todo el mundo está denunciando los nefastos impactos ecológicos de la fiebre del biodiesel y la palma aceitera.

Unir estas tres fuentes y convertir sus propuestas en un movimiento nacional y mundial, hará posible que las personas, las culturas y los bosques no sean consumidas como biodiesel y podamos tener un futuro amable para la naturaleza, los indígenas, los afrocolombianos y los trabajadores de Colombia.

Éste es un fragmento de "Colombia, caña de azúcar y palma aceitera, biocombustibles y relaciones de dominación", que apareció en el *Boletín de la Red por una América Libre de Transgénicos*, número 289, 29 de noviembre de 2007.

Desiertos verdes del suroccidente colombiano

Diego Alejandro Cardona

Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.

Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.

Estrategias de ocupación territorial. Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:

Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.

La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).

Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.

Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.

Foto: Leonardo Melgarejo



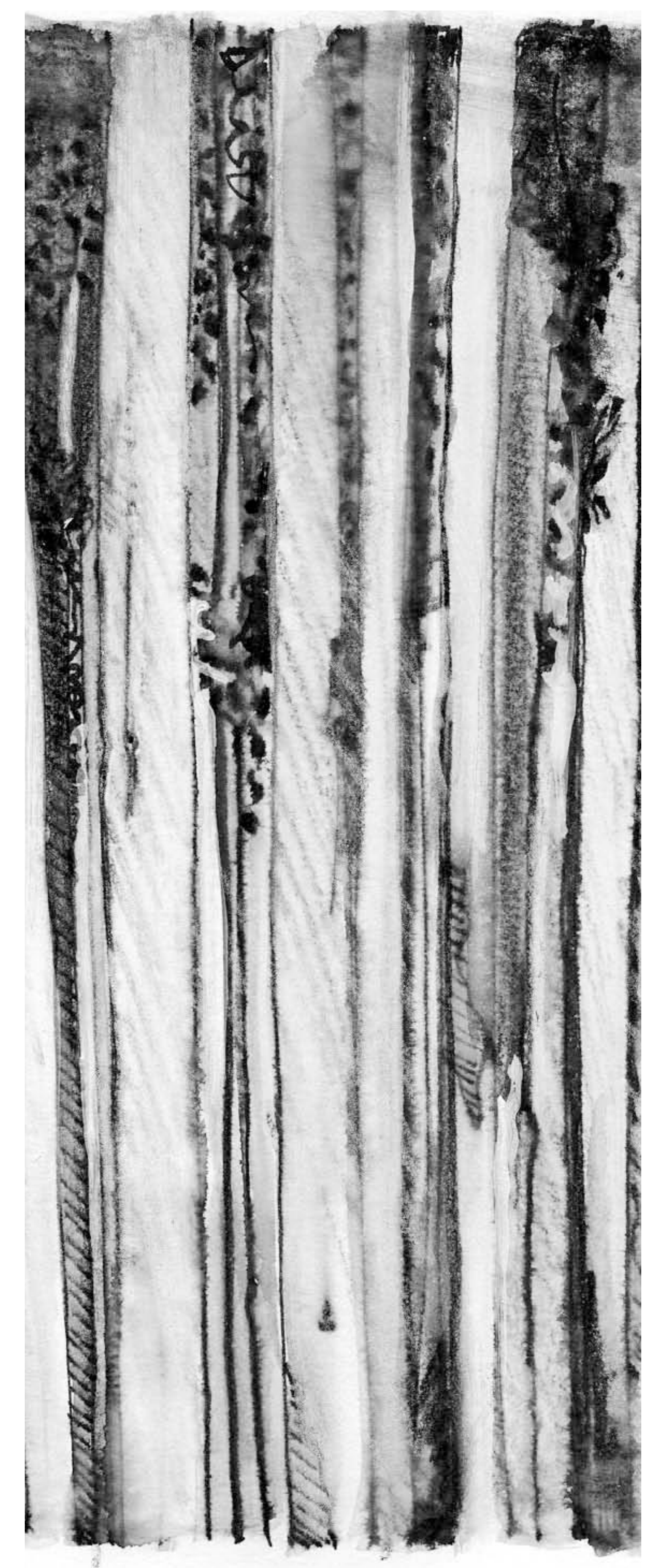
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una "privatización por apropiación" que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se "apropian" del agua, "privando" de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.

Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.

Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.

En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.

El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de "ocupación territorial". Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los naci-


Atziri Carranza

mientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por "desiertos verdes", imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.

La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que "la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la CRQ... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales".

Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.

Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: "el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales" que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.

Diego Alejandro Cardona es parte de CENSAT Agua Viva
Amigos de la Tierra Colombia selvas@censat.org

Desplazamientos involuntarios por los agronegocios en Uruguay

Patricia P. Gainza y Mariana Viera Cherro

Introducción. La expansión de los monocultivos en América Latina es consecuencia de la consolidación de un proyecto productivo, extractivo y de transferencia de Naturaleza de los países del Tercer Mundo a los países industrializados en función de la acumulación de ganancias. Orquestada por los grandes bloques económicos, esta forma de producción se impuso en muchos países de la región de la mano de las empresas transnacionales —Uruguay no es la excepción—, e invade no sólo las formas de trabajo, sino las construcciones cultural y subjetiva de las comunidades afectadas. Altera las formas de verse a sí mismas y de relacionarse con el medio en que conviven.

En el caso uruguayo, es una constante la venta o arriendo de la tierra a las empresas del agronegocio para tales monocultivos. El efecto son desplazamientos involuntarios que, como otros procesos migratorios, son la consecuencia de decisiones políticas, económicas, sociales y ambientales que se enfrentan de manera diferente según las condiciones de los diversos colectivos.

En América Latina, las migraciones son producto de la destrucción de los bosques, de la implantación de los monocultivos, de la minería, del cambio climático y tienen origen en el colonialismo, la colonización económica y el racismo ambiental.

En el caso de la agricultura familiar uruguaya estamos frente a un proceso de desterritorialización que se produce, no debido a que estas familias pertenezcan a "todos los lugares", sino que por el contrario, como dice Octavio Ianni, "ya no son de ningún lugar". Son movilizados, desplazados de los lugares donde han desarrollado su vida, en muchos casos más de cincuenta años.

Un proceso de investigación-acción participativa realizado a lo largo del 2008 con víctimas del desplazamiento por los agronegocios sojero y forestal (editado bajo el titulo *Estamos rodead@s,**) recogió los testimonios de las personas afectadas sobre los impactos del desarrollo de esa lógica productiva y financiera de los agronegocios sobre algunas poblaciones rurales de Uruguay, específicamente en los departamentos de Rocha y Río Negro.

La mayoría no compra campos y se va a la periferia de Rocha. Eso es lo más triste porque terminan sin nada.
(Pequeño productor ganadero de la Sierra de Rocha)



Foto: Eduardo Manuel Sánchez

La forestación no sólo es mala para la ganadería, secan el agua, la chupan, ya no hay manantiales. Mi hijo sale a cazar chanchos que te matan las ovejas. Acá hay un círculo, estamos cercados. Rodeados. Vendieron estancias para forestar y forestaron todo. (Agricultora familiar de Rocha)

Erosión causada por las raices de los eucaliptos.
Foto: Leonardo Melgarejo



Punto de partida. La nueva modalidad de ocupación del espacio rural, denominada monocultivo, sea de soja o eucaliptos, genera desplazamientos de poblaciones y una subsecuente violación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Indagamos entonces las razones planteadas por mujeres y hombres rurales para arrendar o vender sus tierras, y para no hacerlo, las trayectorias migratorias de quienes vendieron sus tierras, y los factores previos que llevaron a tal decisión —haciendo énfasis en aquéllos de tipo productivo y en los impactos sobre la posesión de la tierra, la subjetividad y los aspectos culturales, la salud, la pérdida de servicios y otros.

Poner énfasis en los monocultivos de soja y las plantaciones de árboles se debe a la amplia incidencia que estas dos expresiones del agronegocio han tenido en Uruguay en las últimas décadas y a su importante proyección a futuro. El crecimiento de las explotaciones forestales en la década de 1990 fue de 570%. A ello se suma el cada vez mayor número de fábricas de procesamiento de pulpa de celulosa que gestionan su instalación en Uruguay. El crecimiento de la soja ha sido exponencial, pasando de 8 mil hectáreas en 1998 a 600 mil hectáreas en la actualidad, y su exportación creció de 10848 toneladas en 2000, a más de 700 mil en 2008.

Se enfocaron localidades siguiendo el aumento en la cantidad de tierras arrendadas o vendidas en la última década, la existencia de cambios en el uso del suelo, el desplazamiento de otros tipos de producción más sustentables en términos sociales, ecológicos, económicos y culturales, los datos sobre movilidad poblacional en cada uno de esos territorios y la existencia de redes sociales en la zona. Esto nos llevó a los departamentos de Rocha y Río Negro: espacios donde desarrollamos este intercambio con las y los pequeños productores familiares.

Impactos sobre las familias. A lo largo del proceso se encontraron una larga serie de impactos y consecuencias de estos tipos de producción sobre la vida, la cultura y la salud de los hombres y mujeres: desposesión de la tierra, afectación sobre otros tipos de producción, pérdida de identidad rural, desvalorización del estilo de vida rural imperante, pérdida de soberanía alimentaria, cambio del paisaje y sentimiento de encierro y aislamiento, escasez de agua, malas condiciones de salubridad en los alrededores y surgimiento de plagas, disminución o pérdida de servicios, afectación por el uso de agroquímicos, inexistencia de nuevas fuentes de trabajo, insuficiencia de políticas públicas para la producción familiar y la alimentación, escasez de recursos económicos, necesidad de buscar oportunidades de mejor calidad de vida (que incluye acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y servicios y ocio), entre otros.

La emigración de las familias del campo uruguayo a raíz del aumento de las hectáreas dedicadas a la soja y la forestación, en algunas situaciones involucra aspectos volitivos —pero no es en ningún caso voluntaria. La venta o arriendo de los campos para estos dos agronegocios son, en todos los casos explorados, consecuencia de tener que enfrentar condiciones ambientales y productivas adversas, para las cuales tampoco el Estado da las respuestas que los pequeños agricultores familiares esperan y necesitan.

La amplia mayoría de las familias que deja el campo lo hace en condiciones de precariedad, lo que pone en jaque la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales, y también afecta la dimensión cultural y de pertenencia. Esto provoca un resquebrajamiento del tejido social que, en algunas zonas, específicamente en la Sierra de Rocha, se comienza a rearmar en torno a algunos productores jóvenes que se han asentado en estos últimos años con emprendimientos, en su mayoría, de tipo turístico. De todas formas encontramos una corriente generalizada hacia la desarticulación de la pertenencia a esa cultura y a ese lugar.

Es indispensable que Uruguay retome un debate sobre el territorio, las formas de ser y estar en los territorios que debemos defender y promover, y los derechos colectivos sobre el mismo. Esto es fundamental para construir las soberanías alimentaria y energética de nuestro pueblo.

El abandono de los proyectos productivos vinculados a la agricultura familiar son evaluados por las personas entrevistadas como una pérdida de sentido en su quehacer socio-económico-cultural, en el sentido amplio: con respecto a lo que "toda la vida se ha hecho", o "lo único que saben hacer".

La pauperización de la agricultura familiar a pequeña escala continúa y el vínculo identitario con la vida agraria continúa desvalorizándose frente a otras formas de vida. Las nuevas generaciones abandonan cada vez más el medio rural y los que intentan retomarlo encuentran muchas trabas para lograrlo, como el elevado precio de la tierra.

Los agricultores familiares de Uruguay se ven obligados a abandonar sus tierras porque son rodeados por grandes empresas transnacionales o grandes productores que compran cientos y miles de hectáreas para monocultivos o porque se van quedando solos en el campo (con las repercusiones que esto tiene en la pérdida de servicios públicos) hasta que la situación se devela insostenible. El desplazamiento de estos agricultores desde sus territorios originales genera movimientos que en primera instancia van hacia las periferias de las ciudades más cercanas. Éste es sólo el primer paso. Quien siente la presión de las periferias y la mayoría de las veces no tiene acceso a los servicios básicos (al tiempo que sus derechos son vulnerados), comienza a vislumbrar nuevas rutas y la cultura migratoria se asienta como una estrategia más de supervivencia.

La presencia y las políticas depredadoras de las empresas transnacionales en los territorios y la Naturaleza de los países latinoamericanos son la principal causa de las migraciones al norte y sur-sur. La única forma de detener estos procesos (basada en la realización de derechos) es garantizar la tenencia de la tierra a las personas y familias que trabajan en ella. Sólo políticas tendientes a construir y fortalecer la soberanía alimentaria, y a diversificar la agricultura para el autosustento y los mercados locales, con base en los saberes, la cultura y las preferencias locales, detendrán el éxodo de las familias del campo al norte global.


Aztiri Carranza

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay *Estamos rodead@s: agronegocios, derechos humanos y migraciones. El caso uruguayo.* Informe elaborado por Patricia P. Gainza y Mariana Viera Cherro, Tradinco, SA, Montevideo, 2009.

Yo he sido desplazado a los campos bajos o montes donde hay menos riesgos [de que las colmenas sean alcanzadas por los químicos utilizados en la producción de soja]. No sé hasta cuando porque los espacios son cada vez más chiquitos.
(Productor apícola de Paysandú)

Los desastres de la piña en Costa Rica

Isaac Rojas
COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica

El cultivo de la piña en Costa Rica abarca más de 60 mil hectáreas. Este monocultivo se ha extendido por todo el país en forma acelerada. En 2004, el área total del cultivo era de 23 mil hectáreas y según datos de varias instancias, su crecimiento ha sido de más de 300% en los últimos nueve años. La exportación de piña, generó más de 2 millones de dólares. Esta cantidad muestra la ganancia que el sector privado, como Dole, ha tenido. Al igual que todos los demás monocultivos, éste no se caracteriza por transferir riqueza ecónomica a las comunidades donde se sitúa y, mucho menos, contribuir en la construcción y mejoramiento de condiciones que resulten en una mejor calidad de vida.


Atziri Carranza

Los impactos provocados por este monocultivo son muchos y diversos:

- Elimina las prácticas agrícolas tradicionales y con ello varios cultivos esenciales para la soberanía alimentaria de diversas comunidades se han dejado de sembrar.
- Concentra tierras en manos de grandes corporaciones.
- Propicia plagas que afectan el ganado y a las personas como lo es la mosca ganadera.
- Modifica y contamina los ríos, se secan pozos de agua y se secan y desaparecen quebradas.
- Perjudica la salud de las personas por las fumigaciones constantes que realizan sobre las plantaciones de piña.
- Desaparecen los bosques y con ellos enorme cantidad de biodiversidad.
- En el campo laboral, no se respeta la jornada establecida por ley, las condiciones de trabajo no son las mejores y se da la subcontratación para evitar el pago de las cargas sociales (el derecho de las personas trabajadoras). Existe persecución hacia quienes intentan organizarse a través de la constitución de un sindicato.
- Se ha cortado un gran número de árboles cuyas semillas pueden llegar a los cultivos de piña: si una de estas semillas llega a Estados Unidos, la piña no se acepta debido a que esto se considera bioterrorismo por lo que quienes producen piña, han optado por talar los árboles.

- La piña también impacta negativamente los bosques en otra forma: gran parte de la madera producida en el país, se dedica a la elaboración de tarimas donde son ubicadas las piñas para su exportación.

Como vemos, los impactos son múltiples y diversos y además, comunes entre todos los monocultivos.

Las comunidades que son invadidas por este monocultivo, se ubican en regiones empobrecidas del país por lo que las piñeras se presentan como un factor de desarrollo que brinda trabajo, regala unos poquitos fondos para arreglar la escuela o el salón comunal y en algunos casos, hasta llega a arreglar carreteras… para su propio beneficio y actividad. En varias comunidades, algunas personas trabajan bajo difíciles condiciones en las piñeras ya que no hay más alternativa.

Desde hace varios meses, la principal carretera a la región atlántica del país ha sido bloqueada por diversas comunidades afectadas por el monocultivo de la piña. Una y otra vez, todas las semanas durante un día entero, las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y Milano protestan porque sufren desde hace más de dos años los impactos del monocultivo de la piña. Un día, autoridades llegaron a sus casas y les dijeron que no podían usar el agua que les llegaba por el acueducto público ya que estaba contaminada con bromacil y otros 25 químicos más que se usan para fumigar el monocultivo de la piña que luego es exportada a Europa y Estados Unidos. Hoy en día, el agua posee ocho veces más contaminantes que hace dos años y se encontró 4.8 microgramos por litro de bromacil cuando la cantidad aceptada en Estados Unidos es apneas de 0.6 microgramos por litro. A partir de que les dijeron que no podían usar su agua, de día de por medio, un camión cisterna visita estas comunidades para dejarles su agua: llenan estañones que luego tienen que cargar hasta sus casas para poder cocinar, bañarse y tomar. Si no cumplen con este ritual, simplemente no toman agua. Seis mil personas son las afectadas que han tratado de buscar alguna solución: han tratado de hablar con la titular del Ministerio de Salud y la señora ministra no ha hecho nada más que decir que todo esta bajo control y que no hay peligro en tomar el agua ... y es cierto. Usted podría tomarse un vaso de agua y no morir, pero, si lo tiene que hacer todos los días ¿qué pasará con los efectos acumulativos? Tampoco pueden reclamarle a las piñeras porque, de seguro, algún familiar sería despedido y dónde encontrar trabajo en comunidades que han sido abandonadas por el gobierno desde hace varios años. Entonces, no es difícil que las personas cuenten que volvieron a tomar agua porque no les alcanza la que les dejan los camiones cisterna o se aburrieron de esperarlo y tampoco, por lo tanto, es extraño encontrar personas con alergias, manchas y llagas en la piel. Eso sí, siempre les dicen que ya casi arreglan la situación y volverán a tener agua para cubrir sus necesidades básicas. Y para que, de paso, que se cumpla el discurso de que el acceso a agua potable es un derecho humano.

Además, la piña es el nuevo cultivo dorado protegido por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y en vías de serlo con el nuevo tratado comercial que se "negocia" con la Unión Europea. Así, las transnacionales tendrán más derechos para seguir sembrando piña bajo la complicidad de gobiernos que actúan como defensores de la destrucción y la muerte.

Mientras tanto, en Europa se seguirá comiendo piña por ser sano comer frutas y además porque la piña es sabrosa, al tiempo que algunos grupos están informando sobre los desastres del monocultivo de la piña en Costa Rica. Los gobiernos (como el de Alemania) tiene una masiva campaña donde le dice a la gente, coma frutas, coma sano. Así, cuando algunas personas piensan que comen sanamente, otras personas tienen que ingeniárselas para poder tener agua. Es verdad ese viejo dicho que dice que mientras unos se comen la piña, a otros nos duele la panza.



Foto: Carlos Vicente

Desde hace varios meses, la principal carretera a la región atlántica del país ha sido bloqueada por diversas comunidades afectadas por el monocultivo de la piña. Una y otra vez, todas las semanas durante un día entero, las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y Milano protestan porque sufren desde hace más de dos años los impactos del monocultivo de la piña

República Dominicana

Tomate industrial en Azua

Luis Cabrera

Desde hace más de treinta años, la provincia de Azua en la República Dominicana ha sido la principal zona productora del tomate industrial del país. Existen tres grandes compañías que procesan tomate para el mercado nacional y durante cinco meses del año dominan la economía local y la vida de las familias campesinas y de la gente trabajadora de la zona.

Azua tiene una población de unos 200 mil habitantes cuya fuente principal de ingreso es la actividad agropecuaria. El Valle de Azua tiene una superficie de 19 mil hectáreas de vocación agrícola y en la zona de montaña se encuentra una área de vocación agroforestal. Azua tiene un clima cálido y hasta 1976, no contaba con una gran fuente de agua. Se cultivaban guineo (banano), plátano, yuca, habichuela, melón, y ají (chile) entre otros. En 1974, se inició la siembra de tomate industrial. En 1976, con la construcción del canal del Yaque del Sur, la economía de la provincia se convirtió en una de las principales provincias productivas de la región sur del país. El estado dominicano facilitó canales de riego y se desarrolló una siembra intensiva del tomate. El éxito de la producción lleva a las compañías que tenían sus plantaciones de procesamiento en la región norte del país a instalar sus molinos en Azua.

La siembra del tomate en la región se inicia en octubre y el ciclo de cultivo es de 120 días. Los tomates se procesan para producir diferentes derivados de tomate como pasta, catchup, conserva y vinagre. Los productos se venden en los colmados (tiendas locales de pequeño consumo) y supermercados en todo el país y, en menor cuantía, son exportados al país vecino de Haití.

En los ochenta y noventa, el tomate fue producido con un gran paquete tecnológico de pesticidas, fungicidas y herbicidas muy fuertes, muchos de los cuales están prohibidos hoy en día.

Como muchas veces pasa, los grandes agroempresarios maximizan su capital sobre la base de una alta productividad sin darle gran importancia a lo que pueda pasarle a la población y al ambiente. Ese paquete tecnológico no sólo perjudica la salud de los trabajadores y contamina las aguas de la zona, también elimina la mayoría de los insectos benéficos. En 1994 se encontró mucha mosca blanca *(bemisia tabaci)*. A partir de entonces, se desequilibró el ecosistema de la provincia lo que provocó grandes enfermedades en las plantaciones del tomate y en la mayoría de los cultivos de hortalizas como la berenjena, el molondrón, el ají (chile), el melón, el pepino y la sandia, entre otros.

Mecanismos de financiamiento. La gran mayoría de las familias campesinas de Azua no tienen títulos definitivos de terreno propio —algunas tienen parcelas de reforma agraria (proceso que inició en los años setenta) y otras trabajan en parcelas comunitarias. Para hacer realidad la permanencia del tomate industrial como una apuesta para la economía del país y poder desarrollar sus agronegocios, los empresarios desarrollaron una estrategia con el apoyo de sus aliados (principalmente en el ministerio de Agricultura).

La estrategia es firmar contratos con los productores para el financiamiento, y por lo tanto el control, del proceso de cultivo. Las empresas financian una mayor parte de la inversión de la siembra: desde preparar la tierra hasta el transporte del producto, de la parcela a donde se realiza el pesaje. A la hora del pago por la cosecha, los costos se descuentan del productor, con los intereses correspondientes, después de pesarla.

Los productores pequeños y medianos que financian las empresas son denominados “colonos tomateros” y se dividen en 3 tipos: Colono A, B y C según la regularidad con que siembren, y su productividad. Los productores de tomate que no firman contratos de financiamiento con las empresas se llaman “tomateros independientes” y deben firmar contratos de venta con las compañías. Para asegurarse el reclutamiento de los productores y te-

ner superficies considerables que le permitan éxito en la cosecha de cada año, las agroempresas no sólo reclutan a los parceleros con avance y otras modalidades como la nivelación o preparación de la tierra con maquinaria; también tienen un técnico a su servicio por cada cierta área de cultivo.

El financiamiento de las empresas incluye el suministro de todos los insumos agrícolas, que se aplican a las parcelas mediante brigadas de trabajadores, facilitadas por las empresas, usando un aparato llamado la bomba estacionaria. La industria facilita el cheque por cada actividad para la realización de las labores agrícolas controlando así las aplicaciones y el manejo en cada una de las siembras. El hecho de avanzarle dinero al colono a cambio de la siembra crea una dependencia que al final crea problemas en cuanto a la lucha por mejores condiciones.

Además, las agroempresas acostumbran violar las normas y las leyes laborales. En cuanto intentan sindicalizarse los trabajadores, son despedidos y no regresan más.

El papel del Estado. Es muy sabido que los últimos cinco gobiernos en el poder han descuidado la zona rural, en especial a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Con el fin de quitarse lo que ellos llaman "la carga campesina", prefieren que el sector privado sea quien asuma el papel que le corresponde al Estado.

En el caso del tomate, el gobierno, mediante el ministerio de Agricultura, decidió apoyar a las procesadoras de tomate dándoles todas las facilidades para que se mantengan en el campo produciendo, aunque los campesinos paguen los efectos del desajuste y la crisis en el sector. La política es proteger la inversión privada mientras aumenta cada día más su capital.



La mano de obra. Es cierto que el tomate es una fuente de empleo en un país donde reina el desempleo, pero ese empleo es injusto y parcial, pues la zafra tomatera sólo dura unos 120 días y el resto del año las comunidades siguen con problemas de desempleo. Además, principalmente son tres grupos poblacionales los que se aprovechan como empleados: los migrantes haitianos, las mujeres y los niños y niñas.

Las agroindustrias tienen una cantidad importante de empleados controlados por ellas mismas: trabajadores agrícolas en sus fincas privadas (en su mayoría haitianos), trabajadores en las plantas procesadoras, y transportistas, entre otros. Al final de cada zafra de tomate, algunos se quedan para el procesamiento de otros cultivos (maíz y guandul), pero una gran proporción es despedida por las limitaciones laborales.

Las industrias han creado un modelo de autoproteccionismo a su favor (desde el Estado) con el argumento de invertir y de crear empleos en la zona rural, sobre todo en las comunidades donde se produce tomate.

A raíz de la crisis de la mosca blanca por los efectos de la degeneración del suelo, se creó un consejo de Manejo Integrado de Plagas (MIP), presidido por los técnicos de los agroempresarios. El consejo manejaba la política de las resoluciones para la aplicación de la veda: la prohibición de todo cultivo hospedero de la mosca blanca (melón, sandía, ají, berenjena, habichuela) durante los tres meses previos a la siembra del tomate (julio a septiembre).


Rini Templeton

Los gastos de la veda, por la cual se eliminan cerca de 70 a 80 mil tareas de cultivo por año en Azua, son cubiertos por las agroempresas procesadoras —éstas pagan el combustible de los vehículos y las dietas de los militares que vigilan la zona. En términos reales, es un precio que se paga por la protección al empresariado y es por esa razón que, por más de 16 años, las industrias han manejado la siembra a su criterio sin tomar en cuenta a los productores ni a sus organizaciones. Consciente de esta realidad, desde 1992 intervino la Federación de Campesinos Independientes "Mamá Tingó" (Fecainmat) reclamando los derechos de los productores y las productoras y luchando por la justicia.

La Federación Mamá Tingó. La Fecainmat surgió en 1989 por razones de necesidad organizativa para darle repuesta a los grandes problemas en la zona rural de Azua y el país. Agrupó a cinco organizaciones de base de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarios y de campesinos sin tierra en la lucha por la tierra y el apoyo a la producción agropecuaria por parte del Estado.

La Federación se integró al asunto de tomate en el 1992 en coordinación con la Junta de Regantes del Valle de Azua para hacer cambiar la regla de juego. Se lanzó una lucha que terminó con la ocupación de las instalaciones de la agroempresa Famosa y del centro de maquinaria y equipo de la secretaría de Agricultura (Prosema). El resultado fue un acuerdo en lo que se aumentó el precio del tomate pagado al productor y se consiguió la participación en el Consejo del Manejo Integrado de Plagas y la participación en las discusiones donde se determina el destino del tomate.

Esa acción provocó que los contratos entre los productores y las agroempresas donde se rigen las normas de la zafra, se definan entre ambas partes, incluyendo los costos de producción y el precio del tomate. Provocó la conformación de la Comisión Tripartita, compuesta por las agroindustrias, la Secretaria de Agricultura y la Fecainmat como representante de los y las campesinas.

La Comisión Tripartita tiene las funciones de conocer todo lo relativo a la producción y la comercialización del tomate, de conocer el contrato que rige la siembra de cada año, y de establecer los convenios de la importación de tomate en caso de déficit.

La postura de Fecainmat. La Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó está consciente del peligro del tomate como monocultivo, pero no puede negar que dinamiza la economía de la provincia. La Federación cree que lo que se necesita es un manejo distinto del paquete tecnológico que se implementa en la siembra para eliminar la dependencia de los agroquímicos, implementando rotaciones de cultivos que reduzcan los impactos del monocultivo.

La familia Corripio, dueña de la agroindustria Victorina, es la principal accionista de un periódico nacional (el *Listin Diario*), un canal de televisión (*Telen Antilla*, canal 2) e incide en otros medios con la promoción de otros negocios de su propiedad como tiendas comerciales de electrodomésticos y ferreterías. Por lo tanto, es difícil que el movimiento campesino tenga voz en los medios de comunicación nacionales. Comunicadores solidarios han aportado materiales importantes a la lucha campesina, el video documental *Tingó, bajo el sol de Azua* realizado en los años noventa tras la propuesta de la Fecainmat.

En Azua, el movimiento campesino todavía no tiene la fuerza suficiente para salirse del monocultivo del tomate industrial —lo cual afecta la vida de los campesinos del país y de los inmigrantes haitianos. Sin embargo, con la participación de los campesinos y campesinas de Azua, del país y del mundo, el sector campesino puede exigir con mayor fuerza organizativa que se haga lo más justo posible.

Como dijo Mamá Tingó, líder campesina asesinada en 1974 durante el brutal régimen del gobierno de Joaquín Balaguer: "La tierra es para quien la trabaja".

Unidad y Luchar por un Mejor Vivir

Luis Cabrera, secretario de Organización de la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó (Fecainmat) de Azua, y coordinador general de la Articulación Nacional Campesina, República Dominicana. Editado por William Austen Bradbury, técnico de la Coordinación Regional del Caribe de Veterinarios sin Fronteras.

El video *Tingó, bajo el sol de Azua*, puede verse en: http://www.vimeo.com/4988855

Soja [soya]

Las consecuencias inevitables de un modelo genocida y ecocida

GRAIN

Trece años de soja en Argentina. La amplia experiencia adquirida en Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una "republiqueta sojera".

En 1996 y de manera absolutamente solapada y antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en nuestros campos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones "asesoró" a la secretaría sobre la aprobación de OGM.

Ahora, mes con mes, vivimos en Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión territorial producida por la imposición del monocultivo de soja transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.

Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son moneda corriente en las noticias pero solamente desde algunos medios alternativos aparece relacionada con la "sojización".

Todo esto viene de la mano de la instalación de una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como "fenómenos naturales".



Soja en Rio Grande do Sul, Brasil.
Foto: Leonardo Melgarejo

Por eso lo primero y fundamental es recuperar la mirada integral de la problemática. Únicamente mirando y analizando la totalidad y la complejidad de la situación se podrá llegar a alguna conclusión útil para avanzar en alguna dirección y salir de la rueda destructiva en la que el modelo de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.

Después de trece años de expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina las consecuencias socioambientales son una verdadera catástrofe. Presentamos un breve repaso por los datos concretos que hablan de la tragedia de la soja en el Cono Sur.

En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 18 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra directa.



Soja en Rio Grande do Sul, Brasil.
Foto: Leonardo Melgarejo

Luego de pasar más de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato

Esta superficie representa más del 50% de la superficie agrícola del país.

Prácticamente 100% de la soja que se cultivará es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (soja RR).

La soja RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y también creadora del glifosato, el herbicida que se debe utilizar para sembrar la soja RR. Monsanto controla 90% de las semillas transgénicas que se comercializan a nivel mundial.

Monsanto declaró que las ganancias generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el 2008 en relación con el 2007.

Este año se aplicarán más de 200 millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.

El producto comercial cuyo principio activo es el glifosato (Roundup) contiene además una serie de coadyuvantes que aumentan notablemente su toxicidad, fundamentalmente el surfactante POEA (polioxietil amina) cuya toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor que la del glifosato.

Por supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de muchísimas malezas resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son: *Hybanthus parviflorus* (Violetilla), *Parietaria debilis* (Yerba Fresca), *Viola arvensis* (Violeta Silvestre), *Petunia axillaris* (Petunia), *Verbena litoralis* (Verbena), *Commelina erecta* (Flor de Santa Lucía), *Convulvulus arvensis* (Correhuela), *Ipomoea purpurea* (Bejuco), *Iresine difusa* (Iresine) y recientemente el *Sorghum halepense* (Sorgo de alepo) que por ser una maleza muy difícil de controlar ha despertado gran alarma.

Luego de pasar más de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato.

Además se utilizarán otros herbicidas y agrotóxicos para controlar malezas y plagas del monocultivo de soja ya que la siembra directa requiere de la aplicación de otros herbicidas antes de la siembra de la soja: entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, otros seis millones de litros de atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán.

Esta lluvia de agrotóxicos produce tremendos impactos sobre la salud de la población, animales domésticos, cultivos alimenticios y contamina suelos, cursos de agua y el aire en toda la extensión del cultivo de soja. Suman cientos los casos denunciados por distintas organizaciones e investigadores en los cuales está perfectamente documenta-

do el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus producciones.

La difusión pública de estas denuncias ha llevado a que recientemente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con glifosato.

Este avance desenfrenado de la soja se ha producido a pesar de que según recientes investigaciones de la Universidad de Kansas la soja RR produce entre un 6 y un 10% menos que la soja convencional.

El monocultivo de soja repetido año tras años en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.

Cada cosecha de soja extrae año a año miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo que se exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada año se van con la soja un millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo.

También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos 42 500 millones de metros cúbicos de agua cada año (datos de la temporada 2004/2005) correspondiendo 28 190 millones a la pampa húmeda.

Cada año se deforestan en Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola debido fundamentalmente a la expansión del monocultivo de soja.

Considerando que cada 500 hectáreas de soja requieren de un trabajador rural es evidente la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva.

Los grandes productores sojeros están obteniendo ganancias extraordinarias. El Grupo Los Grobo que declara cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en todo el Cono Sur (Paraguay, Brasil y Uruguay) apuesta a controlar 750 mil hectáreas.

El modelo sojero produce una enorme concentración de la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la tierra por grandes productores o por su arrendamiento por los "Pooles de Siembra". Como consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de los establecimientos productivos.

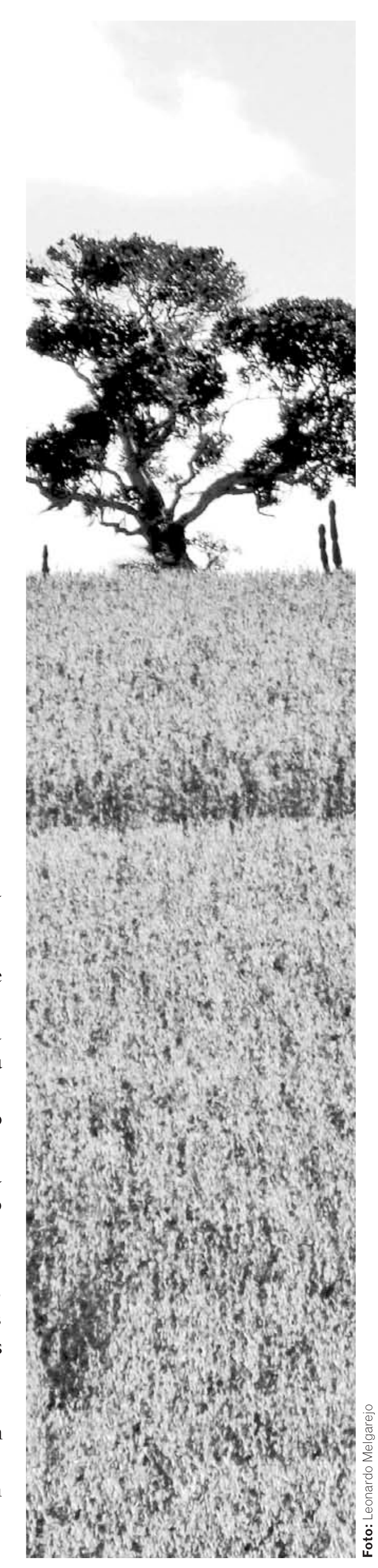
La obvia consecuencia de esta concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30 mil a 15 mil.

En el caso del algodón su producción disminuyó en un 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia de Formosa como consecuencia del avance de la soja.

Miles de campesinos son expulsados violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-VC y el Movimiento Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la persecución de campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus tierras en forma violenta para imponer el cultivo de soja.

Finalmente es fundamental tener presente que la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta.

¿Quién gobierna la República Unida de la Soja? Los tibios intentos de las frágiles democracias latinoamericanas por poner algún límite al poder económico dominante generado por dos décadas de globalización y neoliberalización económica han encontrado en los últimos meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes terratenientes con las corporaciones del agro-


Foto: Leonardo Melgarejo

negocio que están actuando de manera brutal en todos los países del Cono Sur.

No se trata aquí de hacer un juicio sobre los gobiernos democráticos de la región, ni de evaluar su capacidad de transformación de la realidad o su compromiso con los pueblos latinoamericanos. Dejamos esto para los pueblos que desde sus propios procesos van respondiendo y creando espacios para responder y construir nuevas realidades.

Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros que apenas ocupan algunas columnas en los medios; todos aparentemente desconectados entre sí pero profundamente ligados en una raíz común que es la de someter a los pueblos, controlar su agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus territorios.

Un hilo común atraviesa todas estas noticias y se fortalece como metáfora aleccionadora de las pretensiones de estos sectores: la soja [soya] transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur intenta ser, de hecho, la "República Unida de la Soja".

Así, el lock-out patronal de los terratenientes sojeros de la Argentina que ocurrió en 2008 mostró la senda de lo que luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión cargada de odio, desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos originarios.

Allí aparece en escena como uno de los principales dirigentes de la "Media Luna" el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que "casualmente" resulta ser uno de los grandes productores de soja de la región.

En los días de pleno recambio democrático que llenó de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio también brutalmente conmocionado por la represión contra campesinos que incluso llevó a la muerte al campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes anunciando que van a recurrir a las armas para defender sus latifundios.

En Uruguay y en medio de suaves presiones gubernamentales para establecer restricciones sobre el incremento de las áreas para el cultivo de soja con la creación de un Plan de Producción Agrícola también los grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de amenazas los grandes medios.

Desde sus autoridades, Brasil ya se rindió a los transgénicos y ha convertido a la CTNBio en una puerta de aprobación automática de todo los que las corporaciones desean.

Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de las "nuevas" mercancías transgénicas de Monsanto. No es casual que la soja transgénica aparezca en muchas noticias: es simplemente un instrumento del control corporativo de la agricultura y el control territorial que llega de la mano de las agroempresas y sus patrones, los grandes productores y las corporaciones transnacionales.

Por supuesto que cada uno de estos actores tiene mecanismos de acción diferenciados: las corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad en los medios masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben. También son quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos casos en que se necesita la intervención política directa o bajo las sombras.

En cambio, los grandes productores sojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad, pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por la vida y la dignidad humana para consagrarse al único dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces ellos sí pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar campesinos o dividir un país.

La República Unida de la Soja permanece con sus murallas altas y su reino de especulación y muerte en el poder. Puede ser que detrás de la caída del muro financiero del capitalismo global también empiecen a caer las murallas de esta República. Los pueblos están listos para seguir haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación.

Para profundizar

Biodiversidad en América Latina y el Caribe, http://www.biodiversidadla.org

Campaña Paren de Fumigar http://www.grr.org.ar/campanapdf/index.php

GEPAMA http://www.gepama.com.ar/

GRAIN, http://www.grain.org

Fundación Proteger http://www.proteger.org.ar/soja

Instituto de Investigaciones Gino Germani http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pub_rural.htm

La Soja Mata http://www.lasojamata.org/es
Redaf http://redaf.org.ar/noticias/?p=329

RR, La cosecha Amarga http://www.rrlacosechaamarga.blogspot.com/

Soja para Hoy, Hambre para mañana http://sojahambre.blogspot.com/

Video Hambre de Soja http://www.dailymotion.com/video/xu9kc_hambre-de-soja

La supuesta democratización de la soja

Jorge Eduardo Rulli

Digamos una vez más, porque es importante tomar plena conciencia, que las sojas RR, modificadas genéticamente, son parte de un paquete tecnológico compuesto por herbicidas y otros tóxicos, y ciertas tecnologías agrícolas como la siembra directa, tecnologías que a partir de los años noventa instalaron en la Argentina un modelo productivo de gran escala y enorme dependencia de insumos. Las consecuencias sociales y ambientales de esta agricultura industrial con transgénicos fueron realmente devastadoras para nuestro país. Además de la desaparición de muchísimos miles de pequeños y medianos productores, millones de argentinos se vieron obligados a migrar del campo a la ciudad, expulsados de sus pueblos y arrancados de sus modos de vida tradicionales, para instalarse en periferias urbanas de pobreza extrema y pasaron a ser sostenidos con planes asistenciales que se pagaron con las retenciones a la soja y debieron alimentarse en los comedores para indigentes y en los comedores escolares, con la misma soja transgénica que la Argentina producía como forrajes para los cerdos y las gallinas de Europa y China.

Como cultivo para la exportación, la soja ayudó a una minoría de propietarios de campos a salir de las deudas que tenían y les permitió alcanzar niveles de vida jamás imaginados. El nuevo paisaje argentino pasó a ser el de los desiertos verdes de los monocultivos: los pequeños pueblos desaparecieron, y también innumerables oficios y prácticas culturales, como los alambradores, los puesteros y gran parte de los tamberos. Desapareció la familia rural, el arraigo, y languidece en las periferias urbanas la antigua cultura rural. La frontera agropecuaria se expandió, y barriendo el monte y la vida campesina llegó a las selvas de yungas, empujando la caña y los cultivares de limones hacia los piedemontes.

El precio de la tierra hizo impensable la ganadería, al menos tal como la conocíamos. Ahora, el ganado se amontonó en los *feedlots* o se marginó en las zonas de esteros, en islas o en lugares donde el proceso hegemónico de agricultura no podía imponerse por carecer de tierras aptas. La práctica de una agricultura sin rotaciones, sumado a intensas y reiteradas fumigaciones de tóxicos, liquidaron buena parte del fósforo, los nutrientes y la vida microbiana de los suelos argentinos. Algunos ecosistemas como el del Chaco o el norte santafecino colapsaron, el cáncer se convirtió en epidemia y la Argentina batió record de cosechas y de niños nacidos con malformaciones, debido a que sus madres estuvieron en contacto con los venenos o fueron fumigadas durante el embarazo. En los marcos de la llamada globalización, el caso argentino es emblemático de la nueva sumisión a las corporaciones, de la instalación de un modelo productivo que por sus extendidos daños colaterales perpetra un verdadero genocidio sobre la propia población.

Se favoreció el modelo de los agronegocios, que partía del concepto de hacer de la agricultura un negocio y no una forma de la existencia en el campo como lo fuera anteriormente con los chacareros.



Soja en Rio Grande do Sul, Brasil. **Foto:** Leonardo Melgarejo


Foto: Leonardo Melgarejo

Los espacios de producción de alimentos y los espacios de comercialización de alimentos frescos desaparecieron, en beneficio de las cadenas agroalimentarias y de la industrialización de todo aquello que constituye la comida de los argentinos. El trabajo precario sostiene actualmente, en gran medida, el reducido mercado de verduras y hortalizas, mientras el modelo agroexportador se reconfigura hacia nuevos parámetros de producción y dependencia global a las grandes corporaciones. Las actuales crisis del campo ocultan bajo el circo mediático de las políticas electorales, la profundización del actual modelo. Estamos a medio camino entre la republiqueta de la soja forrajera, y la republiqueta de los biocombustibles y de la biogenética, estadio en el que primarán definitivamente los grandes "pooles" [o fideicomisos agropecuarios], el complejo aceitero sojero, los grandes "feedloteros" [dedicados a la engorda intensiva de ganado], los frigoríficos, las refinerías de agrocombustibles y los exportadores [...] De hecho, hace mucho que todo el país depende de una discusión sobre los derechos de exportación, y sin embargo, jamás se ha escuchado a un exportador hablar del tema y aparentemente están muy conformes con las políticas existentes, de tal manera dicen los expertos, que en la Argentina ganan hasta cincuenta veces lo que ganarían en otros mercados de exportación, sin contar con controles significativos sobre las actividades que realizan.

Por otra parte, la insistencia de la izquierda local sobre la propiedad de la tierra y el que se levante la consigna de la reforma agraria como solución al problema de la creciente sojización, confunde el pensamiento de la opinión pública y resulta absolutamente funcional al modelo impuesto por las corporaciones. A menos que nos refiramos a la propiedad del dominio de la tierra que ocupan desde antiguos pequeños campesinos de provincias interiores, estaremos sacando el foco de atención de la necesidad de desactivar el modelo para llevarlo, como en una operación distractiva, a los confines del modelo, donde se expande la frontera de agriculturización compulsiva y las situaciones pueden ser sumamente dramáticas, pero nunca decisivas. La insistencia en la consigna de reforma agraria por parte de una cierta izquierda, sin el acompañamiento explícito del concepto de soberanía alimentaria, encubre la aspiración inconfesable de ampliar el actual modelo de monocultivos transgénicos con nuevos contingentes de sectores rurales, en una operatoria que hemos denominado con sarcasmo: la "democratización del modelo sojero".

Hoy la cuestión pasa clara y determinantemente, por el uso y no por la propiedad de la tierra, ya que ningún gran capitalista, al precio de la tierra en la actualidad, aceptaría mantener semejantes capitales inmóviles, cuando su dinero se le reproduce más fácilmente en los servicios, en la intermediación o en el uso de la tierra ajena a la que empobrece sin mayores consecuencia para el propio patrimonio. El problema surge de consolidar el modelo de la soja canalizando hacia luchas sociales a los desocupados de la agricultura. De esa manera, facilitó la instalación del modelo actual asistencial y clientelar, modelo social complementario e indispensable a los planes corporativos que requieren tan sólo del territorio y de los bienes naturales: biocombustibles, minería por cianurización, bosques implantados y pasta de papel. Las corporaciones no necesitan hoy de las derechas, sino que precisan gobernantes y líderes que se ocupen de lo social y que estén convencidos, tal como conviene a las empresas, que el hambre del mundo


Foto: Leonardo Melgarejo

puede solucionarse con más y más biotecnología. Las corporaciones necesitan líderes con los que puedan negociar las nuevas reglas del dominio internacional, líderes que administren la fragmentación actual de la sociedad y que acentúen los crecientes astillamientos de las identidades y de los intereses, en las nuevas metrópolis de la pobreza, conglomerados urbanos en procesos de volverse tugurios, siempre al borde de los colapsos ambientales y sumidos en la inseguridad y particularmente en la inseguridad alimentaria.

En las nuevas sociedades globalizadas, la conciencia ciudadana languidece sumida en el consumo de imágenes, mientras la política pareciera haberse transformado en un modo de vida en que unos pocos hacen negocios y otros muchos se aseguran un salario magro de aquí a las elecciones. El resto, parece dispuesto a optar, una vez más entre la Coca y la Pepsi. El grueso de los intelectuales, permanecen agobiados por su propia historia, en un mecanismo de negación de los fracasos que sólo saben leer como derrotas, mecanismo que los conduce a persistir una y otra vez en el mismo o similar error.

Los costados progresistas de la izquierda latinoamericana, manifiestamente anacrónicos en épocas de cambios climáticos y de evidente agotamiento de los recursos de vida del planeta, su rechazo a comprender la importancia de la ecología en la lucha de los pueblos, y esa contumaz convicción en la neutralidad de las ciencias y de las tecnologías, heredada de los mitos de los siglos XVIII y XIX, los hace funcionales a los intereses de las corporaciones y al modelo de globalización y post globalización.

Mientras tanto, las nuevas plagas globales surgidas de esos siniestros estercoleros y pozos sépticos de la nueva y gigantesca industria de producción de carnes en encierro, siembran el terror en las poblaciones del planeta como si fuesen amenazas apocalípticas y posibilitan ingentes negocios de las corporaciones de los medicamentos. Gigantismo de las producciones, bioindustria, monocultivos con transgénicos, desaparición de la biodiversidad, ausencia del Estado, desprotección creciente de los pueblos, contaminación y descenso de los sistemas inmunológicos son los resultados inevitables de estos modelos que se impulsan tanto desde las derechas como desde las izquierdas. Necesitamos escapar de esas trampas y persistir en la búsqueda de nuevos caminos. Somos cada vez más los que participamos en la empresa de salvar el planeta y recuperar escalas y modos de vida que respeten nuestra propia humanidad. En esta batalla por la vida no existen tareas menores, y el sentido de la responsabilidad personal es uno de los instrumentos más formidables que podemos comprometer en la lucha. De allí la importancia de la concientización y de las prácticas ecológicas que millones de personas están incorporando: nuevos hábitos de reciclaje, rehuso y reutilización; reemplazar las bolsas de plástico, desmedicalizar la propia salud, producir los propios alimentos y reproducir árboles y difundirlo, comprar a pequeños productores en mercados locales y adecuar la alimentación a los frutos de estación, evitando todo lo posible los productos industrializados. Estamos en el buen camino y somos cada vez más numerosos, ni siquiera nos proponemos ganar, sino que hemos hecho del camino la batalla por la vida. No nos pueden vencer.

La versión completa de este editorial (3 de mayo de 2009), puede consultarse en la página electrónica del programa radial *Horizonte Sur*, transmitido por 870 AM en Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, http://horizontesurblog.blogspot.com/

Brasil y los nuevos emporios azucareros

GRAIN

Una de las tendencias más destructivas de la agricultura en los últimos veinte años es la expansión de las plantaciones de soja [o soya] en el cono sur de América Latina. Agresivamente, las empresas que estuvieron a la cabeza de ese "auge" se mueven ahora a la caña de azúcar y fijan la mira en grandes extensiones de tierra en los países del sur, donde el azúcar puede producirse muy barato. De no oponerle resistencia, es probable que haya que enfrentar graves impactos: la producción local de alimentos será menospreciada, habrá expulsión de mano de obra y desplazamiento de comunidades o quedarán expuestos a crecientes niveles de plaguicidas. Las agroempresas extranjeras afianzarán su control del azúcar. Analizamos la confluencia entre el avance de la caña de azúcar genéticamente modificada y las transformaciones de la industria azucarera en Brasil con algunos atisbos en el panorama global.

En tan sólo 10 años, casi toda la pampa argentina y enormes extensiones de bosques y tierras agrícolas en Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay fueron convertidas en desiertos verdes, monocultivos de soja. El auge de la soja en América Latina le proporcionó sitios de producción barata y abundante al pequeño grupo de gigantes cerealeros mundiales que dominan el comercio internacional de semillas oleaginosas y el mercado de alimentos comerciales. Esas empresas, como Cargill, ADM y Bunge, también hicieron miles de millones de dólares con la venta de los fertilizantes químicos requeridos, mientras otras grandes compañías extranjeras, como AGCO y John Deere, obtuvieron pingües beneficios con la venta de tractores. Monsanto y Syngenta obtuvieron ganancias récord vendiendo sus semillas modificadas genéticamente y sus plaguicidas químicos.

La invasión de la soja se basó en un modelo de producción que utiliza semillas modificadas genéticamente para soportar enormes dosis de herbicidas químicos. Monsanto puso las semillas y los herbicidas mientras la nueva generación de compañías agrícolas, dirigidas por empresarios urbanos, arrendó o absorbió grandes extensiones de tierra y administró la producción. Toda vez que se ha aplicado este modelo, los pequeños agricultores y los campesinos fueron expulsados y las comunidades locales resultaron devastadas por el éxodo rural y la contaminación con productos químicos.

A las grandes agroempresas transnacionales, la experiencia con la soja en el cono sur les mostró el modo de lucrar con la expansión de la agricultura industrial en los países en desarrollo y les abrió la puerta a una nueva era de conquista. El azúcar, un cultivo con un largo historial de destrucción ambiental y cultural, y de cruda explotación humana, bien podría ser el próximo promotor de un auge al estilo de la soja, sobre todo porque en el campo ya hay nuevos cultivos de azúcar transgénica.

La hora de los agronegocios. Hoy, 70% del suministro mundial de azúcar proviene de la caña azucarera. La caña está plantada en unos 15 millones de hectáreas en más de 100 países de la región tropical y subtropical.

Brasil es ahora el mayor productor mundial de azúcar y por lejos el mayor exportador de azúcar. Cerca de tres cuartas partes de la expansión de la producción de caña de azúcar en los últimos diez años ocurrieron en Brasil, donde la superficie de caña de azúcar creció un promedio de 300 mil hectáreas por año entre 2000 y 2007 —una tasa equivalente a la expansión del cultivo de soja en el país. En 2008, la superficie de caña de azúcar registró un notable aumento del 14%. Una proporción considerable de la producción de caña de azúcar de Brasil se destina a la industria local de etanol, pero gran parte sigue fluyendo hacia el mercado mundial. Más

de la mitad de las exportaciones mundiales de azúcar sin refinar proviene de Brasil. A principios de los años noventa representaba sólo 7%.

El aumento monumental de los agrocombustibles configura una tendencia decisiva en la actual producción mundial de azúcar, que es considerada como una de las materias primas más rentables en la producción de etanol. El mercado mundial de etanol crece a gran velocidad, conforme varios mercados importantes de combustibles utilizados en el transporte ponen en vigor los mandatos que exigen ciertos porcentajes de etanol mezclado con petróleo (o están por hacerlo). Esto ha hecho crecer en gran medida la demanda de azúcar y a su vez, esta demanda expande la producción mundial de azúcar. Las grandes agroempresas introducen esta perspectiva en la producción mundial y se embolsan las ganancias.

También hay nuevos actores en la industria del azúcar, sobre todo en la producción de etanol. Cargill, que ya controla 15% del comercio mundial del azúcar, hizo hace poco grandes inversiones en la producción de caña de azúcar en Brasil y México, y emprende proyectos conjuntos en refinerías y/o etanol en Siria, India y El Salvador. Incluso ADM, rey del etanol de maíz de Estados Unidos, hizo su primera gran inversión en caña de azúcar brasileña en 2008, un proyecto de colaboración que abarca dos fábricas de azúcar/etanol y plantaciones a gran escala. Lo mismo ocurre con las empresas de energía y recursos naturales con sede en el Norte y el Sur, sean grandes actores consolidados —como BP— o capitalistas más pequeños del sector minero.

En el panorama hay una gran expansión en la producción mundial de azúcar, concentrada geográficamente y en manos de un pequeño número de empresas que actúan integradas verticalmente en cadenas mundiales de producción y distribución.

El auge azucarero de Brasil. Es ahí donde las tendencias de la producción mundial de azúcar se hacen sentir más. Allí, la industria azucarera está cada vez más concentrada en pocas familias, conocidas en Brasil como los barones del azúcar, y en unas cuantas compañías extranjeras, que habitualmente actúan asociadas entre sí. Con el aluvión de inversiones extranjeras al sector azucarero de Brasil —9 mil millones de dólares en 2006 sólo para producir etanol—, los barones del azúcar consolidaron su posición y reestructuraron sus empresas con el fin de captar esos flujos de inversión. Algunos incluso pusieron sus negocios familiares en la bolsa de valores brasileña. Es frecuente que los inversionistas extranjeros acaparen las participaciones mayoritarias o las acciones minoritarias, aunque en algunos casos de-


Rini Templeton

jen que los barones del azúcar supervisen las operaciones agrícolas.

Los ingenios de propiedad extranjera procesaron 12% de la caña de azúcar brasileña durante 2007-2008, mientras que a comienzos de la década procesaban menos de 1%. Si se incluyen los ingenios en que los capitales extranjeros tienen la minoría accionaria, esta cifra salta al 23%. Hoy es posible identificar apenas algunos cuantos conglomerados —redes de empresas transnacionales y familias del azúcar— que controlan gran parte de esa industria.

Las compañías azucareras de hoy en Brasil: Guarani y CNAA

Açúcar Guarani. Es la filial brasileña de la transnacional francesa del azúcar, Tereos, que mantiene un estrecho control sobre su abastecimiento de azúcar. Un tercio del mismo proviene de sus propias plantaciones, donde el nivel de cosecha mecanizada aumentó de 32% en 2004 a 80% en 2008. El resto se contrata con abastecedores externos que deben utilizar variedades de caña de azúcar de la compañía y adherirse a sus sistemas para la preparación del suelo, la siembra, la cosecha y el manejo de las enfermedades. Guarani es una de las pocas azucareras en Brasil que firmaron un contrato de abastecimiento de etanol sustentable con la productora sueca de etanol Sekab, que exige la mecanización total de la producción.

Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA). En 2007, Goldman Sachs compró 19% de la segunda mayor fábrica de azúcar, Santa Elisa, parte del conglomerado Crystalsev. Santa Elisa y Goldman Sachs se unieron en un proyecto de 300 millones de dólares con la compañía internacional de comercio exterior Global Foods Holding, y con el Grupo Carlyle. El proyecto conjunto es CNAA, que se supone debe instalar cuatro grandes ingenios azucareros y refinerías de etanol, lo que la convierte en uno de los tres mayores productores de azúcar/etanol de Brasil. Los representantes de la compañía dicen que se expandirá a las áreas "más nuevas" de cultivo de caña en la región centro sur, y que Crystalsev manejará la distribución interna mientras que Global Foods Holding organizará el comercio internacional. CNAA se benefició de una reciente inyección de préstamos: 270 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y más de 200 millones de dólares del BNDES. Dos ingenios ya están funcionando y se construye un tercero. A principios de 2009, Carlyle aumentó su participación en la compañía y se convirtió en el dueño mayoritario, mientras que Santa Elisa fue sacada de la estructura administrativa. CNAA está dirigida ahora por un fondo controlado totalmente por extranjeros y que une al Grupo Carlyle, a Goldman Sachs, a Global Foods Holding y a Discovery Capital.

Los tres principales están conformados en torno a Cosan, Crystalsev y Copersucar, que, según Maurílio Biagi Filho, director de Crystalsev, poseen cerca de un tercio de los ingenios azucareros de Brasil.

Con el auge azucarero de Brasil, la producción se movió del noreste del país al centro sur, donde el terreno es más apto para la producción mecanizada. Millones de hectáreas de El Cerrado, una región de Brasil comparable a la Amazonía por la riqueza de su biodiversidad, fueron abatidas para abrirle espacio a la nueva producción cañera. Los ingenios de esta región son responsables ahora de un 90% de la producción azucarera de Brasil, de la cual cerca de 60% se convierte a etanol. La región se ha convertido en la base del poder de la industria y, con fuerte apoyo del gobierno del presidente Lula, los barones del azúcar de la zona —con sólidas conexiones políticas— y sus socios extranjeros, pudieron fácilmente imponer sus planes de expansión, y reconvierten vastas superficies de tierra agrícola y bosque a la producción de caña de azúcar.

Y si bien la crisis financiera mundial disminuye el ritmo de las cosas, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil, y el Banco Interamericano de Desarrollo, pusieron fondos para habilitar la expansión y consolidación de la industria. También se establecieron recientemente varios fondos de inversión privados, con miles de millones de dólares destinados a la compra de tierra en Brasil para reconvertirla a la producción de caña de azúcar. Uno de ellos es el fondo Radar Propriedades, manejado por Cosan, el fondo Calyx, manejado por Louis Dreyfus y el fondo BrasilAgro, manejado por Cresud, compañía de la cual es propietario el barón argentino de la soja Eduardo Elsztain. No es de sorprender que aumenten los conflictos por la tierra en los lugares donde la caña de azúcar se está expandiendo, a la par de la violencia infligida a quienes se atreven a resistir.

El modelo de producción que buscan aplicar los conglomerados del azúcar en Brasil es de gran escala e integración vertical. Tres cuartas partes de la tierra plantada con caña en el país es propiedad de los ingenios azucareros o bien está rentada por ellos, y los 60 mil productores independientes de Brasil, con predios de menos de 150 hectáreas, representan tan sólo 27% de la producción nacional. Las condiciones de trabajo en las plantaciones cañeras son tristemente famosas por su brutalidad y conforme aumenta el poder de las compañías, explotan más y más a los jornaleros, a quienes generalmente se les paga a destajo, la cantidad de caña que cortan. El promedio de toneladas de caña cortada por día en la

región de São Paulo se ha duplicado de 5-6 toneladas en los años ochenta, a 10-12 toneladas actualmente —lo que se calcula representa 12 mil golpes de machete diarios. Desde 2000, los cortadores de caña de la región aumentaron su productividad en 11.9%, pero les aumentaron tan sólo 9.8% en el mismo periodo. Todos los años mueren trabajadores de agotamiento y el trabajo forzado continúa siendo una práctica generalizada en la industria. La Comisión Pastoral de la Tierra informa que en 2008, 2 164 trabajadores fueron liberados de condiciones de trabajo forzado en las plantaciones de caña de Brasil.

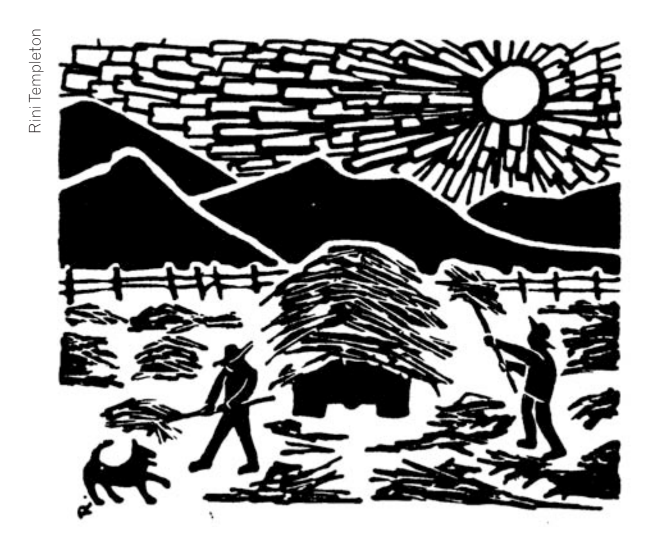
El modelo de producción también se vuelve más industrial: máquinas, nuevos cultivares e insumos químicos suministrados por las agroempresas. El auge de la caña es la razón principal por la que se cuadruplicó el mercado de plaguicidas de Brasil entre 1992 y 2006, alcanzando un valor de más de 5 mil millones de dólares en 2007. También se genera un nuevo, enorme y creciente mercado para las compañías extranjeras que controlan el mercado de tractores de Brasil. La mecanización reduce la necesidad de mano de obra, liberando en parte a las compañías azucareras de las demandas de los trabajadores y de la creciente crítica internacional por las condiciones de trabajo en las plantaciones cañeras. Es también una forma de evitar la práctica común de la quema de los campos antes de realizar la cosecha manual, lo cual tiene gran peso como argumento de los méritos ambientales del etanol brasileño. De hecho, el criterio de "sustentabilidad" elaborado por los importadores de etanol de la Unión Europea y sus abastecedores brasileños, exige la mecanización y, en este sentido, el gobierno brasileño introdujo en 2007 un protocolo que implicará eliminar la quema de campos en 20% de los predios de caña de azúcar para 2010, y en un 100% para 2020.


Rini Templeton

En suma, la expansión de la caña en Brasil se caracteriza por un gran control empresarial, conversión rápida y en gran escala de la tierra y un modelo industrial de producción basado en la explotación de la mano de obra y que las agroempresas suministren maquinaria moderna e insumos. Brasil es el epicentro del auge mundial de la producción de caña de azúcar y, en el escenario internacional, se ha convertido en el principal proponente del etanol a partir de la caña de azúcar, brindando financiamiento, inversiones y tecnología brasileñas a todos los países del mundo que se involucren en producirlo.

Monsanto incursiona en azúcar brasileño y más. Una parte clave de la historia de la expansión de la caña brasileña fue el desarrollo de variedades destinadas a producir etanol, que se buscó adaptar a la región centro-sur. La mayoría de esas variedades la desarrolló el Centro de Tecnología Canavieira (CTC), una institución semi-privada que estuvo controlada por Copersucar pero que ahora es de un grupo que figura entre las principales fábricas de azúcar del país. CTC solía cobrar regalías a quienes no eran sus miembros, pero ahora niega todo acceso a sus variedades a quienes están fuera de su estructura, lo que equivale a más de la mitad de la producción de azúcar del país.

No obstante, un nuevo actor acaba de aparecer en escena y le resta posición a CTC. CanaVialis, la mayor compañía mundial de cultivo de caña de azúcar dentro del sector privado, fue creada en 2003 por varios ex productores públicos con financiamiento del conglomerado brasileño Votorantim, junto con una compañía hermana, Allelyx, dedicada a la biotecnología en caña de azúcar. CanaVialis trabaja para las principales compañías azucareras, quienes la contratan para que desarrolle variedades específicas para ellas. CanaVialis firmó hace poco un acuer-


Rini Templeton

do de 25 millones de dólares con Cosan para instalar 10 estaciones de investigación y desarrollar variedades de caña. También desarrolló variedades de caña de azúcar para la plantación que Odebrecht tiene en Angola. CanaVialis dice que sus variedades abarcan ahora por lo menos el 15% de la superficie de caña de azúcar de Brasil.

Monsanto, la mayor compañía de semillas del mundo, no pasó por alto la jugada. En 2007 se asoció con CanaVialis y Allelyx para desarrollar variedades de caña de azúcar modificada genéticamente resistente al glifosato (Roundup Ready). A fines de 2008 decidió comprar ambas compañías por 280 millones de dólares, lo que repentinamente catapultó a Monsanto a ser la mayor compañía de cultivo de caña de azúcar del mundo.

Es claro que Monsanto usará la red de clientes comerciales de CanaVialis y su colección de germoplasma como plataforma para la introducción generalizada de caña de azúcar transgénica. La caña de azúcar, a diferencia de la soja, es perenne, y lo habitual es que los agricultores replanten cada cinco años, más o menos, y luego utilicen esquejes, no semillas. Así que Monsanto planea vender sus variedades siguiendo el modelo de CanaVialis —trabajando mediante contratos y sociedades con los principales ingenios, que utilizarán las variedades en sus propias plantaciones produciendo bajo contrato con sus proveedores. El mismo modelo podría entonces aplicarse fácilmente fuera de Brasil.

La otra cara del azúcar. La producción de caña de azúcar se ha vuelto tan industrializada e integrada al sistema empresarial de la alimentación que a menudo no se reconocen otras formas de producción y uso. Pero las comunidades tienen cultivos totalmente diferentes —e importantes— basados en la caña de azúcar. Cuando no está refinada y tratada químicamente, la caña de azúcar es en realidad un cultivo sumamente nutritivo, rico en vitaminas y minerales. Brinda una fuente alimenticia importante que ingresa a una vasta economía alimentaria de pequeña escala —desde los fabricantes de panela en la India a los vendedores callejeros que venden jugo de caña en casi todos los países tropicales del mundo.

En Colombia, como en toda América Latina, las comunidades tienen una larga tradición de organizar lo que llaman “trapiches comunitarios”, en los que procesan el jugo de su caña de azúcar local en un producto concentrado llamado panela. Los campesinos y agricultores locales mantienen sus propias variedades de caña de azúcar adaptada a sus tierras. Pero la reciente expansión de la caña de azúcar industrial amenaza destinar sus ya restringidas tierras al etanol cuando que es ahí donde las comunidades producen su propia caña de azúcar. Además, por lo menos en Colombia, las reglamentaciones gubernamentales para la industria del azúcar buscan penalizar la producción local de panela y concentrar la industria del azúcar en manos de grandes compañías.

Comunidades como ésas se interponen en el camino de la caña de azúcar transgénica y corren más riesgo de perder sus tierras por su expansión, de perder su trabajo por la mecanización de la producción de azúcar, de ser contaminadas por los herbicidas y de que sus cultivos tradicionales de caña se contaminen con transgénicos. Corren más riesgo por los posibles efectos adversos sobre la salud derivadas de los transgénicos, ya que consumen la caña de azúcar en su forma pura pues para ellas es una fuente nutritiva, no solamente un edulcorante.

Es importante tomar una posición contra la caña de azúcar transgénica y el azúcar transgénico. Oponernos ante la expansión del azúcar empresarial que ocupa tierras agrícolas que los campesinos podrían utilizar para la producción local de alimentos. Rechazar la industrialización y deshumanización de un cultivo alimenticio que tiene un significado cultural y económico importante para numerosas comunidades. Los jornaleros, los campesinos y otros productores de alimentos de las regiones tropicales y subtropicales dependen de la caña de azúcar como fuente alimenticia y base de su sustento. La confabulación entre las agroempresas y los gobiernos (que busca redibujar el mapa mundial de la producción de azúcar) y la introducción de la caña de azúcar transgénica, sólo empeorará e intensificará los problemas.

Este texto es un extracto de “Emporios del azúcar; la inminente invasión de la caña transgénica”, GRAIN, 2009. El texto completo está disponible en www.grain.org

De un vistazo y muchas aristas

Las plantaciones de árboles no son bosques

Con el fin de entender las alternativas a los monocultivos, convocamos de nuevo las voces de muchos rincones. Reunidas iluminan la resistencia a las plantaciones de pinos, eucaliptos, palma africana y cualquier variedad de árboles que, siendo o no transgénicos —pero si lo son, peor—, tienen graves efectos sobre el entorno natural y social donde sientan sus reales, además de profundizar el desigual modelo que tiene al mundo sumido en varias crisis simultáneas de las que tales empresas siguen lucrando. Casi todos los siguientes fragmentos fueron proporcionados por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), que cuenta con un boletín que difunde sus investigaciones de muchos años.

Los árboles de los bosques tienen una larga vida. Su sistema de raíces es extensivo e interactúa con numerosas especies en la biota del suelo, las cuales son cruciales para reciclar, almacenar y mantener los nutrientes en el ecosistema forestal. Por encima del suelo, los árboles proporcionan sombra, hogar y alimento a comunidades indígenas y a casi 2 millones de especies de insectos, aves, mamíferos, otras plantes, epífitas, hongos y bacterias.

Todos los seres humanos dependen de los bosques de una u otra manera ya sea con agua limpia, hábitat, alimentos, plantas medicinales y como santuarios recreacionales y espirituales.

La mayoría de ellos, especialmente los bosques tropicales, son esenciales para el ciclo del agua que lleva la lluvia hacia los cultivos. Regulan la temperatura de la Tierra, evitando que algunos lugares sean muy calientes o muy fríos. Los bosques absorben dióxido de carbono y producen oxígeno; en ese sentido son los "pulmones" del planeta.

El reemplazo de los bosques por plantaciones de árboles provocará un desastre ecológico para nuestro planeta, especialmente ahora que el calentamiento global se está acelerando dramáticamente.

Los monocultivosde árboles, constituyen una amenaza a los ecosistemas forestales naturales biodiversos. Las denominaciones que ponen las comunidades locales a las plantaciones industriales son revelado-



Foto: Leonardo Melgarejo

ras. El eucalipto es el "árbol egoísta" porque sus plantaciones remueven nutrientes del suelo y consumen tanta agua que los campesinos no pueden cultivar arroz en los campos adyacentes. Los mapuche de Chile se refieren a las plantaciones de pino como "soldados plantados" porque son verdes, están en fila y avanzan. En Brasil, las plantaciones de árboles son "desiertos verdes" y en Sudáfrica las llaman el "cáncer verde". A lo largo y ancho del hemisferio sur las organizaciones y redes se están oponiendo activamente a las plantaciones industriales de árboles en sus tierras. A lo anterior se suma la amenaza de la utilización masiva de árboles transgénicos, que intensificarán los problemas de las plantaciones industriales y la oposición de las comunidades locales. Un reporte conjunto del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y Amigos de la Tierra Internacional señala que los científicos que dicen "mejorar" árboles mediante modificación genética están en rea-



Foto: Leonardo Melgarejo

lidad trabajando para "mejorar la rentabilidad de las empresas" que financian sus investigaciones. Y destaca: "Desde una perspectiva biológica no hay mejora alguna. ¿Es un árbol con menos lignina mejor o peor que uno normal? Es claramente peor, por la pérdida de fuerza estructural resultante, que lo hace susceptible de sufrir serios daños durante las tormentas de viento. ¿Es una 'mejora' un árbol resistente a herbicidas? No lo es, pues permite la fumigación extensiva con herbicidas, que afecta el suelo donde está el árbol, destruye la flora local y repercute sobre la vida silvestre. ¿Qué utilidad puede tener un árbol sin flores, sin frutos y sin semillas para los seres vivos? No proporcionará alimento a miriadas de especies de insectos, pájaros y otras especies que dependen de esto para alimentarse. ¿Es una mejora un árbol con propiedades insecticidas? Es un peligro para muchas especies de insectos que a su vez son parte de cadenas alimentarias mayores". *Mae Wan Ho y Joe Cummings, "Árboles transgénicos, la última amenaza", www.ecoportal.net/content/view/full/45904*

Grandes empresas deforestan la Amazonía legal para plantar eucalipto y transformarlo en carbón vegetal destinado a sus siderúrgicas en la región. Echan abajo la selva tropical más rica del mundo en biodiversidad e implantan el monocultivo de eucalipto, sin ninguna diversidad vegetal, y lo transforman en carbón, que aumenta el calentamiento global. En tanto las empresas se agigantan, la nación se queda con el peso de la degradación ambiental.

La Amazonía es víctima de un ecocidio en función de la ganancia del capital. Si la sociedad no presiona y el gobierno no actúa, en el futuro habrá allí un nuevo Sahara, con graves consecuencias para la sobrevivencia de la humanidad y de la Tierra. *Frei Betto, "Amazonía, ecocidio anunciado", http://alainet.org/active/22088*

Los procesos de recuperación territorial mapuche en Neuquén se enfrentan al creciente embate del capital forestal y petrolero. También entran en contradicción las lógicas de relación con el territorio.

La comunidad mapuche Gelay Ko está cerca de la ciudad de Zapala, a escasos 30 kilómetros, en la zona central de la provincia de Neuquén. Se trata de un espacio geográfico para la vida durante los tiempos fríos, ya que las comunidades están con el ganado en las tierras altas de la montaña durante el verano. En ese ir y venir los mapuche se ven cruzados por la codicia del capital y el atropello estatal.

Silvia Claleo es werkén (vocera) de la comunidad mapuche Gelay Ko. Como werkén participa en la Confederación Mapuche Neuquina, una organización que nuclea alrededor de 62 comunidades en toda la provincia.

La práctica de pastoreo que tradicionalmente realiza el pueblo mapuche implica el traslado, algo que hoy se ve gravemente dificultado. "Culturalmente practicamos la trashumancia, que consiste en estar durante el invierno en lugares más cálidos (invernada) y en el verano trasladarnos a los lugares más altos, denominados espacios de veranada. Es una práctica ancestral que tiene el pueblo mapuche; es proteger el medio donde vivimos, el espacio territorial, porque consideramos que tenemos que dejar reposar el territorio". Este traslado manifiesta un tipo de relación opuesto al que impone hoy el capitalismo, que se expresa mediante la extracción permanente y sin reposo. La comunidad Gelay Ko ahora está en la zona del río Litrán, un espacio en

el que realizan la veranada más de siete comunidades de la zona central y donde vienen creciendo las situaciones de conflicto, "porque una de las políticas de arrinconamiento que ha impulsado el estado neuquino y el Estado nacional es la venta de todo lo que han considerado apto para el turismo o para la forestación", explica Silvia Claleo, más de veintisiete parajes que hoy están en ardua disputa. "Nuestra comunidad viene desde siempre a veranar a estos territorios, que consideramos como propios, para el pastoreo de animales. Venimos, de hecho, de una historia de arrinconamiento y de avasallamiento importante que les tocó vivir a nuestros mayores. Diecinueve años atrás, se creó la Corporación Forestal Neuquina (CorFoNe), como parte de las políticas del estado provincial para la forestación de grandes espacios que antes eran utilizados para la veranada". Este modelo forestal que implantó especies ajenas (sobre todo pinos foráneos "ponderosa y "oregón") tendría severas consecuencias para la región.

Una parte de la producción de esas plantaciones es destinada a la industrialización de la madera. Sin embargo no sólo en Neuquén sino en toda la Patagonia hay ingentes cantidades de pino exótico esperando ser taladas. Investigadores ligados a las asambleas ambientales han denunciado la posibilidad de la instalación de papeleras en el sur argentino. *"Argentina: Resistencia a forestales y petroleras en el Puelmapu", Agencia de Noticias Biodiversidadla, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/48174*

La Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación, se acordó el 14 y 15 de abril de 2007, en Paso Severino, departamento de Florida, donde delegados de organizaciones de pequeños productores agropecuarios y de otras organizaciones sociales provenientes de los cuatro puntos cardinales de Uruguay, concordaron en que la ausencia de estudios de impactos sociales y ambientales previos a la aplicación de la ley forestal y los impactos ya constatados de las plantaciones, significaban desalojo de población rural, escasas oportunidades de empleo, condiciones de trabajo inadecuadas, concentración de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras, transferencia de cuantiosos recursos económicos de toda la población hacia el sector forestal a través de subsidios directos e indirectos, agotamiento y contaminación de los recursos hídricos, degradación de suelos, contaminación de agua y suelos por el uso masivo de agrotóxicos, impactos graves en la flora, en particular sobre el ecosistema de praderas, impactos graves sobre la fauna y aparición de plagas que afectan a otras producciones agropecuarias, además de impactos sobre el paisaje típico uruguayo.

Por tanto decidieron constituir un movimiento nacional para exigir "la inmediata suspensión de todas las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos, salvo aquellas de pequeña escala para abrigo, sombra, leña o insumos de auto-abastecimiento del predio rural".

También exigen una evaluación "seria y completa de los impactos sociales, económicos y ambientales de la forestación con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil, especialmente los más perjudicados. Que en el plan de ordenamiento territorial del país no se incluyan los monocultivos forestales en función de la experiencia de sus impactos económicos, sociales y ambientales negativos para el país. Que se revea la actual legislación forestal con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil, especialmente los más perjudicados. Que se aplique el artículo 47 de la Constitución —que restableció la soberanía del país sobre la gestión de los recursos hídricos— en particular al sector forestal. Que se adopte una legislación que impida la concentración de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Que se discutan las estrategias de desarrollo local con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil especialmente los más marginados. Que se adopten instrumentos legales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida de las familias del campo". Esto significa que la iniciativa dice: Sí a la diversidad productiva y no a los monocultivos forestales. Sí a la distribución equitativa de la tierra —tierra para quien quiere trabajarla—y no a su concentración en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Sí a la defensa y preservación de los recursos naturales y no a la explotación destructiva del rico patrimonio del país y su entrega a intereses empresariales. Sí al bienestar de todos los orientales en armonía con la naturaleza y con la preservación del planeta." *Con información del* Boletín 118, WRM, *mayo de 2007*

"El pueblo se siente afectado... los ríos se están secando, los árboles, la naturaleza se acaba, los animales se ahuyentan, con eso que siembran derrumban todo, ya no hay las especies que había antes… La gente se iba a cazar la guanta, el conejo, todo eso, y ya no pueden ir porque ya no hay montaña donde se pueda ir para cazar. Todo lo que es naturaleza se está ahuyentando, ellos [los animales] por lo menos tenían árboles donde podían vivir y hacer sus casas, ahora ya no hay nada de eso porque cortaron. Eso está puro eucalipto".

En el caso de Tortuga, el antiguo río que atraviesa el poblado es ahora apenas un hilo de agua estancada y la gente se ha visto obligada a hacer un pozo en el propio lecho del río para poder abastecerse de agua. Tal situación es consecuencia directa de la plantación de amplias áreas de eucaliptos en la zona. Al respecto, un poblador local dice: "Éste es el río Tortuga, y mírelo está seco. ¿Cuánto hace que terminó el invierno? Casi nada, y mírelo como está. Más adelante ya no habrá agua. Yo no sabía y nos han hecho conocer. Si desde un principio nosotros hubiéramos sabido que esto nos hacía daño no sembraban, se los impedíamos…"

La empresa ha sido acusada de infringir la ley al haber talado áreas de bosque tropical para sustituirlo por plantaciones de eucalipto. Un habitante de Tortuga cuenta que "botaron todo abajo y sólo plantaron esa planta [el eucalipto]. La empresa botó bosque primario, porque aquí adentro, donde mí [en mi predio] había un bosque que había preservado".

Con estos y otros muchos antecedentes, más de 400 jóvenes de ambos sexos participaron el 13 de mayo de 2006 en una acción contra las plantaciones de la empresa japonesa Eucapacific en la localidad de Tortuga, en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. Eucapacific también violó las normas legales al plantar a menos de 30 metros del río Tortuga. La acción llevada a cabo por los jóvenes consistió en talar —con machetes, hachas y motosierra— unos dos mil árboles de la franja plantada ilegalmente por la empresa cerca del curso de agua. Cada vez que un nuevo árbol caía, los aplausos y consignas de los jóvenes acompañaban la caída.

José Bautista, un habitante de la zona, dijo que la tala de los árboles fue la última opción que tuvieron para que la empresa maderera tome en serio el tema ambiental. Al respecto cuenta: "Hablamos con la ministra de Ambiente, ella vino acá y dijo que iba a suspender los permisos para la siembra de los árboles. Luego nos convocaron a una reunión con Eucapacific y ellos señalaron que no existen tales sembradíos y les creyeron".

Es decir, que la acción no puede ser siquiera considerada ilegal, dado que —según la empresa— esos árboles "no existen". A pesar de ello, los machetes y motosierras mostraban que efectivamente existían y que, si se aplicara la justicia, Eucapacific no sólo debería pagar las multas correspondientes, sino también los jornales de los jóvenes que eliminaron los árboles que la propia empresa debería haber cortado. Sin embargo, la empresa amenazó con iniciar acciones legales contra las personas y organizaciones involucradas. *Patricia Granda, "Monocultivos de árboles en Ecuador",* Boletín número 106, WRM, *mayo de 2006*

La industria forestal es una de las actividades simbólicas del ultra-neoliberalismo del Estado chileno, aplicado y expandido desde la dictadura militar de Pinochet y asumida y sometida por los gobiernos de la concertación. Los dueños de las forestales son de los más ricos de Latinoamérica, enriquecidos a costa del saqueo de bienes públicos y colectivos. En el presente son más de 3 millones de hectáreas de plantaciones en monocultivo de especies exóticas como el pino y el eucalipto. El gobierno de la presidenta Bachelet dio luz verde para una radical expansión que lleva al abismo a las poblaciones y comunidades locales, con severos impactos sociales, culturales y económicos.

Dos grupos económicos, Matte (CMPC) y Angelini (Copec-Arauco-Celco), que entre ambas controlan en Chile un 70% del suelo utilizado para plantaciones y con expansión en Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil, obtuvieron su consolidación durante la dictadura militar. Recibieron tierras gratuitas, beneficios y hasta empresas estatales a bajo costo, como la compañía petrolífera de Chile (Copec) la que prácticamente venía de regalo con Forestal Arauco y celulosa Celco.

Estos grupos económicos siguen controlando el aparato público estatal para su haber. Muchas de sus imposiciones vienen acompañadas de políticas represivas, con criminalización de la protesta social, que incluso han arrojado hasta muertes, como el asesinato del joven mapuche Alex Lemún en noviembre del 2002 en medio de una reivindicación de tierras de un predio forestal de Mininco (CMPC).

Con el Decreto Ley 701, de la dictadura, las empresas se han beneficiado por décadas para cubrir los costos en los procesos de plantaciones y producción. En el presente, ante las dificultades de seguir obteniendo más tierras por los conflictos sociales, han impuesto la política de Estado de introducir especies exóticas entre los campesinos chilenos y las comunidades mapuches por sobre las economías locales, en tierras agrícolas o ganaderas e incluso bosques nativos, agudizando los conflictos y la pérdida de agua. *Alfredo Seguel, "Empresas forestales y su poder fáctico en el Estado chileno", www.mapuexpress.net*

Decir que "sufrieron un proceso violento de expulsión" no refleja todo el horror de las acciones llevadas a cabo por grupos de asesinos paramilitares con el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas. A través de bombardeos, destrucción y quema de viviendas, asesinatos, torturas y desapariciones, la represión logró su objetivo: la expulsión de todas las comunidades (en particular afrocolombianas y



Foto: Leonardo Melgarejo

mestizas) de la región. Diez años después, en una demostración de valentía —en medio de amenazas permanentes— la gente comienza lentamente a retornar a sus hogares destruidos y se encuentra con que sus tierras y bosques en los que han habitado por más de 120 años, están ahora ocupados por miles de hectáreas de monocultivos de palma aceitera y que sus "propietarios" son los mismos paramilitares responsables de las masacres que les empujaron a la migración. "Cuando volvimos, estaba todo sembrado de palma", comenta indignado un poblador.

La indignación logra superar el miedo y los legítimos propietarios se lanzan a recuperar su territorio ocupado por palmas haciendo lo único que se puede hacer: eliminarlas. "Hay que tumbar la palma, que es lo que nos está molestando", dice un retornado. En algunos casos las cortan con motosierras, en otros las arrancan de raíz y a la mayoría les cortan todas las hojas y el brote terminal (las "desmochan"). El trabajo es agotador, dado que las palmas ya cuentan con troncos muy gruesos y sus hojas esconden peligrosas espinas que provocan hinchazones e infecciones. A eso se suma el peligro de las culebras ponzoñosas y las avispas que atacan al momento menos pensado. Unas veinte personas apenas logran eliminar dos hectáreas de palma por día. Al momento de la visita se calculaba que se llevaban unas 40 hectáreas recuperadas, que ya estaban comenzando a ser sembradas con cultivos alimenticios.

Es que en el Curvaradó no se interpreta la palma como vida o como posibilidad de vida. "De qué vida se habla, cuando se habla de biocombustibles derivados de la palma. Aquí la palma es desolación verde, es destrucción humana, es muerte de toda la vida". En esta región, la mayoría de las 50 mil hectáreas del Territorio Colectivo eran selva virgen, con más de 25 ciénagas. Los pobladores dicen: "nos han explotado las maderas que teníamos, las ciénagas han sido canalizadas y secadas, los animales no tienen alimento, las aves se han ido por falta de fruta". *Ricardo Carrere, "Colombia: comunidades eliminan plantaciones de palma de aceite para recuperar su territorio",* Boletín número 121, WRM, *agosto de 2007*

Entre 1992 y 1994 la Asociación Ecologista Costarricense-Amigos de la Tierra Costa Rica (AECO), con organizaciones locales de la península de Osa en el Sur del país, desarrolló una fuerte campaña de denuncia y oposición al proyecto que la compañía transnacional Stone Container pretendía llevar a

cabo en esta región. Dicha empresa proponía sembrar unas 20 mil hectáreas de monocultivo del árbol *Gmelina arborea* como materia prima que abastecería un complejo industrial de producción de astillas que a su vez sería exportado hacia Estados Unidos en buques de hasta 70 mil toneladas. Este complejo industrial y puerto se proponían ubicarlo en el corazón del Golfo Dulce, en una de las zonas costeras mejor conservadas y de mayor diversidad biológica del país.

La campaña tuvo dos grandes logros. Logró evitar que se estableciera este enclave, ya que se demostró que estaba escasamente planificado, era ajeno a la realidad y a las perspectivas sociales de la zona y sus impactos socioambientales eran enormes. No poseía ningún carácter de sustentabilidad. Un segundo logro es que la campaña llamó la atención de una diversidad de sectores sociales del país y facilitó que iniciaran una reflexión nacional sobre los modelos de desarrollo, la sustentabilidad y el derecho de la comunidades locales a planificar, controlar sus recursos y definir su futuro.

Antes de la campaña el sector ambientalista costarricense se limitaba a una serie de labores ligadas a la conservación de áreas protegidas y a la protección de la vida silvestre. En contadas ocasiones, llamaba la atención sobre la producción y el manejo de desechos sólidos. Era un sector pequeño, tímido y hasta cierto punto aislado ya que no estaba ligado a otros movimientos populares en forma permanente. En pocas ocasiones llevó a cabo luchas socioambientales. Con la campaña, el sector ambientalista se empezó a perfilar como movimiento popular y tomó un rumbo nuevo nutriéndose de los conceptos de la ecología social y de la economía ecológica al tiempo que construyó alianzas con otros sectores populares y emitió opiniones y propuestas sobre la realidad nacional consolidándose como un movimiento popular que empezó a denominarse ecologista. Este joven movimiento es ahora caracterizado como una fuerza social que atiende la crisis ambiental desde una perspectiva social, económica, cultural y política realizando propuestas sobre el modelo de desarrollo.

Desde su inicio, la campaña se dedicó a recoger el sentir de las comunidades frente al proyecto de desarrollo impuesto y a fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades mediante tres acciones: facilitar espacios de discusión y reflexión sobre el uso de los recursos naturales ubicados en este territorio y las expectativas de desarrollo de las comunidades locales; facilitar la búsqueda e interpretación de la información disponible sobre los modelos de desarrollo en que se enmarcaba el proyecto Stone (y sobre el propio proyecto y sus alcances) y facilitar el análisis sobre posibles impactos y su relación con los modos de vida propuestos por las comunidades. *Javier Baltodano e Isaac Rojas, "Soñando y empujando: diez años de luchas y propuestas en Costa Rica",* COECOCEIBA-*Amigos de la Tierra Costa Rica.*

A partir de 1967 se comenzaron a instalar monocultivos de eucaliptos en el norte del estado de Espírito Santo, en la región sudeste de Brasil, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose SA, fundada por el empresario noruego Erlin Lorentzen. Él levantó la mayor empresa exportadora de celulosa de eucalipto del mundo, acaparando casi medio millón de hectáreas de tierras en Brasil, con plantaciones de eucaliptos en cinco estados brasileños.

Cuando la empresa llegó a Espírito Santo, invadió primero las tierras de los pueblos tupinikim y guaraníes y en los años setenta las tierras de las comunidades de quilombolas, descendientes de africanos que fueron traídos para realizar el trabajo esclavo en las plantaciones durante la época colonial. Después que destruyera la selva virgen y los ríos de esas comunidades y tras expulsar a los indígenas y a los quilombolas, Aracruz construyó sus tres fábricas de celulosa en el municipio de Aracruz en Macacos, uno de los más de treinta poblados indígenas extintos por los eucaliptos de Aracruz.

Pero tres poblados consiguieron resistir la invasión de Aracruz, y con eso los indígenas cobraron fuerza para emprender la lucha por la recuperación de sus tierras. Fue en 1981 que consiguieron una primera demarcación de 4492 hectáreas de sus tierras, área que aumentó en 2571 hectáreas en 1998. Por fin, en 2007, y después de una intensa lucha, los tupinikim y los guaraníes recuperaron una demarcación de 18070 hectáreas.

Desde 2003, cuando el gobierno federal reglamentó el artículo constitucional que garantiza a las comunidades quilombolas el reconocimiento y la demarcación de sus tierras, las 34 comunidades del norte de Espírito Santo iniciaron también una lucha para recuperar sus tierras. Desde 2007 se delimitó un área (Linharinho) con 9500 hectáreas, casi todas ocupadas por los eucaliptos de Aracruz. Entretanto, Aracruz consiguió suspender el proceso de demarcación y justicia. Otras cuatro áreas están bajo estudio y aguardan su delimitación oficial.

El MST realizó también varias ocupaciones de tierras en Aracruz, la última en 2005, en un área de 8500 hectáreas, de las cuales, conforme al movimiento, 3 mil hectáreas eran tierras públicas que deberían haberse destinado a la reforma agraria y

a la producción de alimentos y no a una empresa privada que produce celulosa para exportación.

Toda esa lucha de resistencia tiene como clave importante la articulación y la solidaridad mutua entre las comunidades tradicionales, los movimientos sociales del campo —como el MST o el Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)—, y algunas entidades de apoyo, académicos, religiosos, estudiantes, etcétera. Todo esto creó, en 1999, una red de alerta contra los desiertos verdes: una red informal y horizontal, sin coordinadores ni presidentes, con el objetivo de enfrentar (con apoyo internacional) el poder de la empresa Aracruz y al mismo tiempo cuestionar el modelo de desarrollo que esta empresa, junto con los gobiernos federal, estatal y municipal ha estado imponiendo al pueblo de Espírito Santo. El monocultivo de eucalipto y la producción de celulosa es un ejemplo paradigmático de la violencia, la injusticia y la exclusión que provoca este modelo en términos sociales, ambientales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, la red intenta construir otro tipo de desarrollo local, basado en la demarcación de las tierras de las comunidades tradicionales, en la reforma agraria, en la producción agroecológica de alimentos, y en la transformación del patrón de exorbitante consumo, inmoral e insustentable que se pone al servicio de las empresas del gran capital como es Aracruz.
A resistência contra a monocultura de eucalipto no Espírito Santo, Brasil

En Espírito Santo, unas 1 300 mujeres de la Vía Campesina llegaron en 14 omnibuses al puerto de Portocel en Barra do Riacho, norte del Estado. El puerto es propiedad de Aracruz Celulose (junto con la empresa japonesa Cenibra, otra productora de celulosa) y es el único puerto de Brasil especializado en embarque de celulosa, con una capacidad de embarque anual de 7.5 millones de toneladas. La medida, que duró cerca de media hora, detuvo por casi cinco horas las actividades de unos 50 camiones preparados para embarcar celulosa. También arrojaron pintura sobre fardos de celulosa, estropeando aproximadamente dos toneladas.



Selva de Chiapas. **Foto:** Juan Ignacio Domínguez

La medida tuvo el objetivo de denunciar ante la sociedad la concentración de tierras de Aracruz Celulose. Cerca de 300 mil hectáreas de tierras están ocupadas por plantaciones de eucaliptos para producir celulosa de exportación, y parte de esas miles de hectáreas son tierras de comunidades indígenas, quilombolas, pescadoras y ribereñas. Aracruz Celulose también concentra el agua: consume diariamente 248 mil metros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo de una ciudad de 2.5 millones de





Selva de Chiapas. **Foto:** Juan Ignacio Domínguez

habitantes, para lo cual desvió parte del río Doce, perjudicando así a varias comunidades locales (ver *Boletín número 72,* WRM*).*

Otra de las medidas de lucha contra el avance de las plantaciones forestales se llevó a cabo en Marañón, donde hay más de diez municipios afectados por los monocultivos de eucaliptos. En la hacienda de Vale do Rio Doce, en Açailândia, mujeres de la Vía Campesina incendiaron varios atados de troncos de eucalipto. En esa zona el eucalipto plantado abastece una carbonería industrial que es responsable de una gran contaminación aérea que afecta las vidas de más de 1 800 habitantes del vecino Asentamiento California. La empresa tiene otras 200 mil hectáreas que se destinarán a la plantación de eucaliptos para abastecer a la celulósica Suzano Papel e Celulose, que se instalará en la región.

La acción se hizo en reclamo de políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria y energética de la población brasilera, en lugar del financiamiento de grandes proyectos del capital internacional que destruyen los recursos naturales y no generan empleos.

Por otro lado, en el Estado de Rio Grande do Sul, unas 700 campesinas ocuparon la estancia Ana Paula, perteneciente a la empresa Votorantim Celulose y Papel (VCP), en Candiota. La ocupación se inició con el corte de eucaliptos del establecimiento y formó parte de la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres de la Vía Campesina con la finalidad de denunciar las consecuencias del monocultivo de eucalipto en la región: falta de agua para consumo humano y producción, desertificación y acidez del suelo, pérdida de biodiversidad con graves consecuencias para el ecosistema de praderas. Muchos vecinos de VCP ya sienten los impactos de los monocultivos, que han secado sus pozos y han alterado la fauna, provocando invasiones de animales que afectan sus cultivos. Sin embargo, los dineros públicos, que salen de los bolsillos de la población en forma de impuestos, se siguen destinando a bancos y empresas del agronegocio que degradan el ambiente, expulsan a los campesinos del campo y no generan empleo. *Brasil: en el Día de la Mujer, campesinas en lucha contra las plantaciones forestales,* Boletín número 141 del WRM, *abril de 2009*

Acción Ecológica publicó los resultados de una investigación en la cual se documentan los graves impactos sociales y ambientales provocados por los monocultivos de pinos y eucaliptos, tanto en la zona andina como en Esmeraldas. Los hallazgos de esta investigación ponen de manifiesto la inconveniencia de promover pinos y eucaliptos, pues desplazan a poblaciones campesinas, quitan recursos vitales a las poblaciones locales, ocupan tierras productoras de alimentos, aumentan la pobreza en las zonas donde se instalan, generan menos ocupación que la que desplazan, destruyen las economías locales, agotan los recursos hídricos, afectan gravemente la biodiversidad de flora y fauna, degradan ecosistemas de bosques y páramos, contaminan las fuentes de agua con químicos y pesticidas.

Con base en dichas conclusiones Acción Ecológica hizo públicas las siguientes propuestas en relación a plantaciones forestales:

- Demandamos que el Estado tome todas las medidas para que se pare la expansión de los monocultivos forestales.
- El Estado no debe otorgar incentivos ni directos ni indirectos para el fomento de plantaciones, ni entregar en concesión tierras para este fin.
- Toda plantación futura deberá ser sometida a evaluación de impacto ambiental previo, a otros mecanismos de gestión ambiental (auditorías), y deberá cumplir con todas las normas ambientales vigentes, así como el respeto a la consulta previa informada a las comunidades, que incluya el derecho a decir "NO".

- El Estado debe obligar a las empresas forestales a retirar los árboles de todas aquellas áreas plantadas que están afectando los recursos naturales y las economías de las poblaciones locales, y a realizar una reparación ambiental y social a las poblaciones afectadas.
- El Estado debe obligar a las empresas a retirar todos los árboles plantados ilegalmente, como por ejemplo los plantados a menos de 30 metros de los cursos de agua.

En resumen, lo que Acción Ecológica pide es que se reconozca que estos monocultivos tienen graves impactos sobre la gente y el ambiente y que el Estado tiene por ende la obligación de controlar los existentes y de impedir que se sigan expandiendo. *Acción Ecológica, Propuesta sobre Plantaciones Forestales, 17 de mayo,* Boletín número 106 del WRM, *mayo de 2006*

Las comunidades que hemos vivido y convivido con los páramos por mucho tiempo, conocemos sus lagunas porque en ellas nos refrescamos; son ecosistemas de hábitat de muchos animales y plantas que nos ayudan a mantenernos en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás, por eso nos interesa su preservación por que igualmente pensamos en nuestros hijos y en su futuro.

La pervivencia de los páramos, es la permanencia de la naturaleza, ella nos puede continuar dando el alimento espiritual y material que necesitamos o no lo puede quitar todo y dejarnos morir de hambre y sed, si no la escuchamos y no la respetamos. La naturaleza no es una parte, es un todo y los páramos hacen parte de ese todo como el lugar más frágil, por eso son espacios de mucho respeto, de secretos invaluables, de agua; es allí donde conjugan toda una gama de elementos que por nada del mundo se pueden cambiar, pues son la vida.

Hemos cuidado y seguiremos cuidando los páramos, hemos vivido como parte de ellos, conocemos y reconocemos que para unos son ecosistemas y para otros son territorio, que aún se conservan en buen grado; que "su importancia radica en la gran biodiversidad, el intercambio de genes y ser refugio de especies emblemáticas como el cóndor, el puma, el oso y la danta" y aún más en su función hidrológica que presta como el mayor regulador de la alta montaña, y qué no decir de sus paisajes que expresan ese carácter solemne y sagrado que viene de nuestros antepasados

Nos oponemos a que declaren nuestros páramos como reservas en territorios ancestrales indígenas, a su militarización y al desalojo de las comunidades. Conocemos que el avance de la frontera agrícola es una realidad a la que debemos hacerle frente, sin embargo para esto es necesario y urgente que el Estado cumpla con los compromisos de la adquisición y entrega de las tierras necesarias para las comunidades, haciendo una verdadera reforma agraria; pues es la carencia de tierras productivas y la falta de políticas, que empujan el avance de la frontera agrícola. "Por la defensa y soberanía territorial y ambiental de los páramos de Colombia", *Red Nacional de Páramos, 29 de mayo de 2009*

De repente la biomasa es la respuesta universal para nuestros problemas climáticos y de energía. Sus promotores alegan que será la fuente primordial del combustible para calefacciones, electricidad y transporte. Poco gente se detiene a preguntarse como va a hacerle el planeta para acomodar todas estas demandas y aún así producir comida y conservar espacios silvestres. Pero ahora hay un uso todavía más loco para las astillas de madera. El gran milagro verde funciona así: hay que convertir la superficie del planeta en carbón. Perdón, no es carbón. Ya no le decimos así. Ahora decimos *biochar*. La idea es que los desperdicios de los cultivos y la madera se cocinen para liberar los componentes volátiles (que pueden usarse como combustible) y luego que el residuo —el carbón— se entierre en el suelo. Según los magos que lo promueven, este nuevo milagrito frena el colapso climático, reemplaza el gas y el petróleo, mejora la fertilidad de los suelos, reduce la deforestación, ahorra mano de obra, crea empleos, evita enfermedades respiratorias.

Para empezar, Carbonscape, una compañía que confía en ser de las primeras en comercializar esta técnica, habla de plantar 930 millones de hectáreas. Peter Read propone nuevas plantaciones de árboles de biomasa y cultivos de azúcar que cubran 1 400 millones de hectáreas. Pero la superficie arable en el Reino Unido es de 5.7 millones de hectáreas, la 254ava parte de la cifra propuesta por Read. China cuenta con 104 millones de tierras de cultivo. Estados Unidos tiene 174 millones. La cifra global es de 1360 millones de hectáreas. Si siguiéramos el plan de Read tendríamos que reemplazar los cultivos del mundo con plantaciones de biomasa, lo que causaría una hambruna mundial instantánea, o tendríamos que duplicar el área cultivada del planeta, lo que echaría a perder los hábitats naturales que quedan. Read es uno de los promotores de la primera generación de biocombustibles líquidos, que jugaron un papel importante en el precio de los alimentos de hace un años, lo que lanzó a millones a al hambre. ¿Qué no han aprendido nada? *George Monbiot "Woodchips with everything",* The Guardian, *24 de marzo de 2009*

Perú

Tras la vasta movilización amazónica derogan los decretos de ley 1090 y 1064



Atziri Carranza

A principios de junio, después de que una vasta movilización pacífica de comunidades de pueblos y nacionalidades de la Amazonía peruana iluminara las intenciones gubernamentales de parcelar la selva e instaurar decretos para impulsar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el gobierno de Alan García declaró un Estado de Emergencia que significó en los hechos una sangrienta represión que recorrió los medios de todo el planeta.

Las fuerzas especiales del gobierno peruano arremetieron contra la manifestación pacífica y la represión arrojó un altísimo saldo de asesinatos, heridos y desaparecidos.

Múltiples cartas de adhesión y manifestaciones en otros muchos países, exigieron del gobierno peruano que (en apego a las legislaciones internacionales) respetara el derecho a la libertad de expresión y asociación, y que cesara la persecución y criminalización de quienes se manifestaron. Esas adhesiones rechazaron de modo tajante los decretos legislativos impulsados por el gobierno de García en su intención de firmar acuerdos de libre comercio que abrirán la Amazonía a todo tipo de intereses empresariales. Con tales acuerdos las empresas podrían apoderarse "legalmente" del agua, los hidrocarburos, la biodiversidad, los minerales, las maderas, los saberes y en conjunto, los territorios ancestrales de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía.

Por eso, el 18 de junio, el Tejido de Comunicación (ACIN), de Colombia, escribía: "De un lado, están quienes promueven el 'libre comercio', en guerra abierta contra los pueblos. Han tomado la decisión de parcelar el último pulmón del mundo: la Amazonía, para que avance el 'progreso', es decir, para que se exploten bosques, biodiversidad, agua, hidrocarburos y minerales. O sea ¡todo!… Del otro lado, con la guerra en su contra, están los pueblos en resistencia. Por impedir que parcelen la selva, los denominan salvajes y terroristas y los masacran. Pero al final, la farsa queda en evidencia. El 15 de junio a las 2 de la tarde, en la selva del Perú, los líderes indígenas y el gobierno indigno firmaron un acta. Yacen muertos como mártires indígenas en dos bandos. Los de la Amazonía y los que obedecieron, con uniformes del gobierno, la orden de masacrar a sus hermanos. El gobierno derogó algunos de los decretos que parcelan la selva. Los indígenas levantarán el bloqueo cuando esto se cumpla. Tambalea el gobierno ilegítimo de Alan García. Caen ministros. Tenían razón los indígenas. No se puede parcelar la Amazonía ni se pueden tolerar los decretos que ordenan su destrucción y la de sus pueblos. Hay que decirlo con claridad, ahora que está a la vista del mundo: los salvajes, los asesinos, los terroristas, los atrasados son el presidente del Perú, su gobierno y su contraparte de EUA, Canadá, la UE, al servicio de las transnacionales que han ordenado el TLC para acabar con la vida".

Después de una lucha de 71 días, el 18 de junio el movimiento indígena amazónico se anotó un contundente triunfo al lograr que el Congreso de la República derogara los decretos legislativos 1090 y 1064, como informó puntualmente la agencia noticiosa Servindi.

Daysi Zapata Fasabi, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y lideresa del pueblo yine, afirmó: "La lucha y la vida de nuestros hermanos indígenas no ha sido en vano. Hoy se ha demostrado que nuestra lucha es justa y que no ha sido manipulada por nadie" .

"Daysi encabeza actualmente la Aidesep, luego que su presidente Alberto Pizango obtuviera asilo político en Nicaragua debido a la persecución desatada por el gobierno en su contra", dice el informe de Servindi. No deja de ser revelador que "el parlamentario aprista Mauricio Mulder afirmara que su bancada oficialista votó por la derogatoria 'no porque los decretos eran inconstitucionales ni porque afecten los derechos de propiedad de las comunidades amazónicas' sino 'por estrictas razones de Estado'. Para Servindi, "diversos observadores calificaron de serio revés político el sufrido por el gobierno quién hasta hace unos días acusó de complot al movimiento indígena y lo culpó de promover la desestabilización del país y estar manipulado por intereses extranjeros. El presidente Alan García reconoció una 'sucesión de errores' en el manejo de la protesta amazónica y la falta de consulta a los pueblos indígenas, y respaldó el pedido del premier Yehude Simon para derogar ambos decretos. 'Es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación', sostuvo en un mensaje televisado a la nación".

Según diversas fuentes locales e internacionales el número de muertos es mucho más elevado de lo que han informado y "un elevado número no determinado de muertos indígenas habrían sido ocultados por las fuerzas de seguridad, que acordonaron el lugar de los enfrentamientos e impidieron el registro de las víctimas".

Prosigue el informe de Servindi: "Pueblos ashaninkas, yaneshas, nomatsiguengas, caquintes y asheninka de la selva central agrupados en la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPISC), base regional de Aidesep, iniciaron el bloqueo de vías y amenazaban con tomar las carreteras que suministran de alimentos a la capital".

Los recuentos afirman que el premier peruano Yehude Simon viajó a entrevistarse con la marcha y "sostuvo un diálogo con los voceros de la selva central con los que suscribió un acuerdo de once puntos. Entre los acuerdos estuvo el pedido de derogar los dos decretos en cuestión y la revisión de los demás decretos en un espacio de diálogo de alto nivel".

La nota de Servindi afirma que Lidia Rengifo Lázaro, lideresa del pueblo yanesha y coordinadora de ARPISC, "saludó el afán de rectificación del gobierno pero expresó su deseo de ver primero la derogatoria para levantar el bloqueo. Rengifo, quien vino acompañada de una comitiva de líderes comunales de la selva central, reiteró que los pueblos indígenas quieren participar en la construcción del desarrollo del país y no somos ningún obstáculo para ello. Y afirmó: 'No debe haber más derramamiento de sangre y debemos mirar hacia delante'".

Al tiempo de celebrar la victoria, que los obliga a prestar atención en los meses venideros, Aidesep agradeció la solidaridad nacional e internacional y rememoró la movilización completa.

Fue desde abril que Aidesep emprendió una jornada nacional de lucha contra un paquete de decretos legislativos considerados lesivos a los intereses colectivos de los pueblos indígenas y la Amazonía. Ya el año pasado se había logrado con otra movilización que se derogara el decreto legislativo 1015 —que vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades al permitir que una mayoría simple en asamblea privatice las tierras comunales protegidas por legislaciones nacionales e internacionales planteando, ni más ni menos que "para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año". La lucha se suspendió cuando el Congreso "se comprometió a revisar otros decretos legislativos cuestionados mediante una comision multipartidaria".

Servindi continúa: "A pesar que el informe de dicha comisión —que recomienda derogar otros cinco decretos legislativos— fue aprobado por el Congreso, no se les dió trámite porque la comisión no tenía facultades 'dictaminadoras'. Luego de reiterados pedidos al Congreso, Aidesep decidió reiniciar su movilización nacional el 9 de abril de 2009 poniendo en vilo al país al paralizar numerosas ciudades de la Amazonía peruana. Muchos de los decretos legislativos fueron calificados de inconstitucionales por connotados juristas o instituciones imparciales como la Defensoría del Pueblo. Los citados decretos no fueron promulgados por el Congreso sino por el Poder Ejecutivo aprovechando facultades concedidas por el parlamento para adecuar la legislación peruana a la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos".

Ver http://www.servindi.org/actualidad/13203

Ecuador

El "socialismo del siglo XXI" y la ley de soberanía alimentaria

Fernanda Vallejo. Para superar sus crisis, el capitalismo tiene fórmulas recurrentes, que con cada repetición se tornan más eficaces. Cada vez que el libre mercado exprime al límite las capacidades de producción de seres humanos y naturaleza —cuando es imposible continuar sin rebeliones sociales o naturales y cuando se detiene provisionalmente la capacidad de acumulación y las ganancias—, los grupos hegemónicos recurren al Estado para que se encargue de arreglar el desastre.

De algún modo, hoy estamos viviendo algo así en algunos países de América Latina, bajo la imagen de una oleada de gobiernos "más democráticos". Estados que ponen "en orden la casa" estableciendo nuevas reglas de juego, nuevos pactos sociales (nuevas Constituciones) y nuevas institucionalidades, que le devuelvan su capacidad de mediación, de una distribución un poco menos injusta de la riqueza.

Estos gobiernos progresistas, en algunos países autodefinidos como "socialistas del siglo XXI", construyen un discurso en torno al ciudadano (individual) como sujeto de derechos, reivindican la soberanía y restituyen la autoridad estatal; recogen reivindicaciones surgidas desde las organizaciones sociales, como el derecho a participación plena, democracia participativa y soberanía alimentaria, y se apropian de conceptos como revolución, buen vivir y equidad de género. Vaciado todo lo anterior de mucho de su contenido transformador, se alcanza aún cierta adhesión de sectores populares y campesinos a un proyecto de reforma, sin comprometer cambios de fondo.

Varios movimientos campesinos a indígenas que tuvieron un rol fundamental en la lucha contra el neoliberalismo, hallan en estos Estados remozados la posibilidad de conquistar espacios y canalizar demandas largamente reprimidas.

Por su parte los Estados definen acciones tendientes a atenuar niveles extremos de exclusión, recuperan la inversión en educación y salud, y mantienen e incrementan subsidios focalizados o directos a energía, combustibles, inversión en insumos agrarios, etcétera.

Así el Ecuador, donde se acaba de aprobar una ley denominada de Soberanía Alimentaria, aunque su contenido legitima formas de explotación propias del neoliberalismo que en su momento toparon resistencia en las lucha contra el ALCA y el TLC. Para incorporar estas formas se ha recurrido al uso de un lenguaje lleno de términos que evocan viejas demandas de movimientos y organizaciones sociales: "sustentabilidad, equilibrio ecológico, participación, inclusión, equidad de género", entre otros. Como por arte de magia y juegos de palabras, los contenidos se vacían y la producción de agrocombustibles se trasforma en una alternativa de futuro para el país frente a la dependencia petrolera y su devastación ecológica. El sistema que encadena la producción agropecuaria a los circuitos agroindustriales se transforma en el "mecanismo de inclusión", los campesinos libres son sujetados al mercado y esto es mirado como "opción de vida" para el campo.

Mediante la ley se pretende ejercer un férreo control de la semilla, ilegalizando las semillas nativas o "criollas". Se promueven las medidas sanitarias y fitosanitarias impulsadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (que vía leyes encuentran menos resistencias), al igual que los conceptos de inocuidad, las mejores prácticas agrícolas, el manejo postcosecha, el procesamiento, en fin, todo el control tecnológico en el producto intermedio y final.

Ante la dificultad de los campesinos para cumplir las nuevas normas, los nuevos empresarios del sector agroalimentario se aprestan a darles ayuda. Les dicen que se asocien (que se encadenen), que se les dará la tecnología, y se les comprará el producto: es la imagen de cadena donde todos se benefician, pero ellos controlan todo el circuito, de la producción al consumo.

Sobre la tierra, la ley recoge la reforma agraria de mercado propuesta hace muchos años por el BM y expresa todo lo que combatimos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos que logramos parar. Incorpora como razón de expropiación el que un predio no cumpla su función ambiental. Permite crear de nuevo un mercado de tierras que excluye a los campesinos de su acceso salvo si se endeudan (fragilizando su tenencia) y equipara latifundios improductivos con tierras comunales y territorios indígenas.

Aunque los elementos desarrollados han sido ya adoptados en la legislación de otros países, lo particular del Ecuador es que conjuga todos los elementos promovidos por la OMC y el BM: una fusión acabada del esquema completo y con lenguaje progresista. Con esto el Estado cumple las condiciones que requiere para cualquier tratado de libre comercio o convenio comercial.

Esta ley marco, en que se trazan las líneas generales, deja varios temas fundamentales para ser discutidos más adelante al elaborar leyes específicas, lejos de las miradas públicas, que de seguro contendrán elementos presentados en otros borradores.

La Ley de Soberanía Alimentaria y la Ley de Minería son las mejores evidencias del verdadero carácter de proyecto autodenominado "socialismo del siglo XXI"; eso, y las declaraciones públicas del presidente Correa señalando a los indígenas, ecologistas e izquierdistas "infantiles"

como los peores enemigos de dicho proyecto político. Pero (más allá del entramado jurídico, con o sin éste) es en estos sectores donde se multiplican y comparten las semillas, las tecnologías, los saberes, los alimentos. Es evidente que el movimiento indígena experimenta un desgaste tras décadas de lucha.

También es cierto que las crisis provocadas por el capital suponen también procesos de construcción al interior de los sectores populares. Por sofisticadas que se tornen las formas de explotación, la soberanía más básica, la del alimento, provoca nuevas respuestas en lo cotidiano. Tejidos comunitarios rurales y urbanos, experimentan activas dinámicas de encuentro y alianza, cada vez son más y más visibles los circuitos de economía solidaria que se tejen entre el campo y la ciudad. Es más que una utopía deseada: es la única vía posible de existencia. Día tras día, los campesinos encuentran en sus propios saberes, la vía para recuperar autonomías, territorios, medios propios de producción.

Las tecnologías del capital no son un dogal inevitable. Producir alimentos sanos y soberanos es una tarea que no se detiene. Se configuran nuevos colectivos urbanos, cada vez son más frecuentes las ferias donde se comparten productos, pero también relaciones, confianza, dignidad y autonomía.



Atziri Carranza

“Ningún proyecto de muerte”

***Ojarasca*, con información de Conaie, Ecuador.** A principios de mayo el Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador, del gobierno ecuatoriano, dispuso reanudar “las operaciones determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la Región Amazónica”.

Para los pueblos indígenas que habitan sus ancestrales territorios en la Amazonía esto es un llamado a declararse en “máxima alerta” en defensa de su vida, su territorio y la biodiversidad como lo declararon el Consejo de gobierno de Sarayaku (legendaria comunidad que ha resistido varios años a la petrolera CGC) y los gobiernos de la nacionalidad achuar y shuar (FIPSE-FISCH), que resisten hace muchos años a Burlington, condenada por el Tribunal Constitucional en 1998 por violar derechos colectivos de los pueblos del Bloque 24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó también Medidas Provisionales a favor de los pueblos afectados por el Bloque 23.

Así, los kichwa, shuar y achuar rechazan rotundamente la resolución del Ministerio de Minas, exigen el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por las instancias internacionales y por el Tribunal Constitucional ecuatoriano, y denuncian la “actitud arbitraria del gobierno”. Ésta es contradictoria con los avances en el diálogo con los diferentes ministerios y con el cumplimiento de las medidas provisionales, particularmente el retiro de la pentolita del territorio de Sarayaku, propiedad la empresa CGC (y que mantiene en grave riesgo a la comunidad por ser un poderoso explosivo que la empresa “abandonó” hace años en la comunidad al verse obligada a retirarse por la resistencia de Sarayaku.

Por eso, declaran: “No aceptaremos ningún proyecto de muerte en nuestro territorio que pretenda romper la continuidad de vida del presente, y de las futuras generaciones a las que hemos protegido y defendido con grandes esfuerzos, sacrificio sobrehumano y con el costo de muchas vidas”.

El mito de la Jatropha

Elizabeth bravo, Acción Ecológica, Ecuador. En años recientes todos los países de América Latina han adoptado políticas para promover de manera acelerada cultivos para producir agrocombustibles con justificaciones ligadas a garantizar la soberanía energética y/o enfrentar el cambio climático, y como respuesta a la crisis del agro que viven muchos países del Tercer Mundo.

La crisis alimentaria mundial, que se evidenció con más fuerza en 2007, ha obligado a revisar estos planteamientos, pues es imposible no asociar las variaciones en el precio de los alimentos con el uso de granos en la producción de etanol y agrodiesel.

En varios círculos se ha empezado a promover las llamadas "tierras marginales", donde aparentemente no hay agricultura, para producir agrocombustibles. El argumento es que se estaría "reactivando la economía local sin afectar la producción de alimentos, porque esas zonas son improductivas".

Entre las especies propuestas se destaca la jatropha o piñón. Muchos mitos se han levantado alrededor de esta planta: que no requiere suelos fértiles para crecer, ni de grandes cantidades de agua, que no existen plagas conocidas que la ataquen. Se ha llegado a decir que es un árbol con vocación tercermundista, porque abrirá fuentes de trabajo para los campesinos y mercado para sus productos. El planeta se beneficiará porque se frenará el calentamiento global; las plantaciones de jatropha mejorarán las calidad del suelo, dicen. Antes cabe preguntarnos si esas llamadas "tierras marginales" son en realidad improductivas, o son zonas que no se han insertado a la agricultura industrial. Veamos lo que ocurre en dos provincias ecuatorianas, víctimas de este modelo: Manabí y Loja.

Éstas son zonas donde se conserva una biodiversidad agrícola muy bien adaptada a las condiciones áridas, en donde prevalecen variedades endémicas, y donde las poblaciones han desarrollado sistemas productivos armónicos con los bosques secos, como la extracción de productos del bosque como la lana de ceibo, plantas medicinales y frutas silvestres, y la cría de chivos. Las comunas del sur de Manabí son descendientes de los pueblos donde se han registrado los más antiguos indicios de agricultura en América del Sur, y hasta nuestros días mantienen sistemas ancestrales de manejo de agua como son las "albarradas".

Se dice que la jatropha es ideal para zonas semiáridas, pero en las plantaciones que varias empresas han promovido en estas provincias, se observa que cuando las lluvias faltan, el fruto produce una sola semilla, en lugar de tres que es el promedio. Por eso se necesita usar agua proveniente de carros cisterna cuando la lluvia es escasa, lo que pone a las plantaciones de jatropha en competencia con las humanas en esta zona donde el acceso al agua potable es crítico.

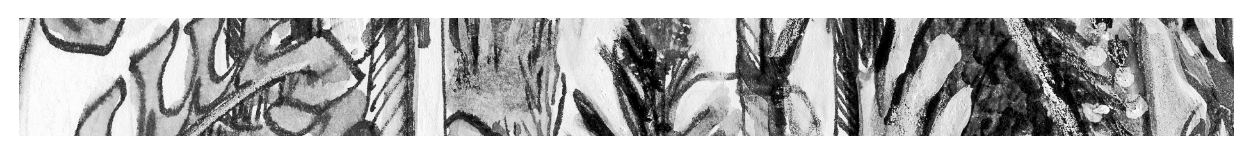
Si bien las empresas no ocupan directamente la tierra de las comunas, han firmado contratos por 20 y 25 años con los comuneros para que planten jatropha y les vendan la producción. Además, las empresas reciben bonos de carbono por la captación de CO_2, a partir de las tierras y el trabajo de unas comunidades que no tienen responsabilidad en el calentamiento global ni relación con el negocio de los bonos de carbono. Estos contratos de largo plazo bajo criterios completamente ajenos a las comunidades significan en la práctica la pérdida de control sobre su territorio.

Dado que el piñón no es un cultivo como tal, sino una planta que está en proceso de domesticación, la producción de aceite es muy variable y depende mucho de las condiciones climáticas, que son muy variantes en la zona. Sin embargo, los contratos establecen que la producción errática y las pérdidas serán responsabilidad de los comuneros, lo que puede llevarles a endeudarse con la empresa e incluso perder su territorio. Se desconocen los efectos de estas plantaciones a gran escala en los suelos, que por definición son pobres. Los comuneros necesitarán añadir fertilizantes y plaguicidas, porque las plagas y enfermedades emergerán, como ocurre con cualquier monocultivo.

El modelo jatropha que se generaliza apunta a un cambio radical en la forma de vida imperante en la zona. Aunque al principio se generen más ingresos monetarios, si estos proyectos prosperan se estaría poniendo en peligro la supervivencia de las comunidades que han tenido la más larga presencia continua en el Ecuador.

La nueva Constitución del Ecuador incorpora como un eje del modelo económico el "buen vivir" que es un concepto que viene de la cosmovisión andina (en kichwa, *sumak kawsay*) que establece un nuevo modelo de "relacionalidad" de las comunidades entre sí, y de éstas con la naturaleza, con base en los ejes de la racionalidad andina: la "relacionalidad", la correspondencia, la complementación, la reciprocidad. ¿Empata el modelo jatropha con el *sumak kawsay* o el buen vivir? Creemos que la respuesta es NO.

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/18/mito.html



Comienza el arrebato por tierras africanas

Según muchos indicios procedentes de muchas partes del mundo, una de las tendencias agrarias actuales es que gobiernos e inversionistas privados, con frecuencia asociados, están atropellándose literalmente por comprar, rentar o hacerse de tierra en el extranjero para sembrar y producir alimentos que se regresan como importaciones a los países promotores, o simplemente para hacer dinero de estos negocios. Desde que comenzó esta tendencia con la crisis alimentaria mundial de 2008, la tendencia no amaina sino que empeora. Lo extraño es que los países que ofrecen tierras o aceptan los tratos propuestos de venta o renta ponen a disposición de los nuevos invasores toda clase de privilegios y artilugios legales para que esto ocurra.

Esto lo ha documentado GRAIN desde 2008* y mantiene un sitio [*http://farmlandgrab.org*] para sistematizar un archivo de investigación con ya más de 800 artículos, informes y entrevistas en torno a apropiaciones de tierra por todo el mundo.

Entre las informaciones más recientes, se sabe que inversionistas sauditas le han pedido a Tanzania que les rente 500 mil hectáreas de tierras de cultivo para sembrar arroz y trigo como parte de un plan que garantice abasto alimentario para el reino. La respuesta de los funcionarios de Tanzania es directa: hay 40.5 millones de hectáreas de tierra de labor y Tanzania está lista para hacer negocios y para rentar parcelas de hasta diez mil hectáreas por periodos de 99 años. Trascendió también que varias firmas sauditas comenzaron a invertir en proyectos agrícolas de Indonesia a Etiopía. Indonesia dijo en agosto que el Grupo Saudita Bin Ladin invertiría 4 300 millones de dólares en 500 mil hectáreas para cultivar arroz.



Por otra parte, trascendió que la República del Congo le ha ofrecido a agricultores sudafricanos 10 millones de hectáreas de tierras de cultivo para sembrar maíz y soya, pero también granjas lecheras y de pollos. Según la agencia Reuters, que ha seguido de cerca los casos de apropiación de tierras, éste sería uno de los mayores acuerdos agrarios en el continente africano. Theo de Jager, presidente adjunto de Agriculture SouthAfrica (AgriSA) dijo que el acuerdo se finiquitará próximamente en Sudáfrica y será un contrato por 99 años sin costo alguno, además de otorgarles algunos beneficios fiscales adicionales: "son vacaciones fiscales los primeros 5 años y luego exención de impuestos de importación de todo el equipo y los insumos agrícolas". Según De Jager unos 1300 agricultores sudafricanos están deseosos de sembrar en la República del Congo. "Hay dos grupos de agricultores interesados", dijo De Jager a Reuters, "uno que quiere abandonar Sudáfrica y reacomodarse por completo en el Congo para cultivar, y otro que sólo quiere diversificar sus operaciones de cultivo al Congo".

Mientras tanto, tales operaciones no pasan desapercibidas para los activistas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales que ya denuncian estos acaparamientos en Egipto, Sudán, Camerún, Senegal, Mozambique y otros países africanos. Uwe Hoering, por ejemplo, un investigador alemán en políticas de desarrollo para varias ONG europeas, llama a estas inversiones "una nueva forma de colonialismo agrario". Hoering dice que estos acaparamientos se hicieron evidentes en África en 2008 como consecuencia de la escalada en pos de agrocombustibles, de la inflación de precios y la supuesta escasez de comida. Aunque las inversiones buscan tierra fértil en otras partes del mundo, el África subsahariana es el destino principal. Las razones son múltiples: "África posee enormes reservas de tierra. Según la FAO, sólo el 14% de la tierra apropiada está cultivada. Los gobiernos africanos están deseosos de permitir que estos acaparamientos ocurran en sus territorios". Entre los candidatos a quedarse con tierra para dislocar sus producciones en África y luego exportarlas de regreso a sus países están varios países industrializados, como Japón, Suecia, China, India y los Estados del Golfo, ricos en petróleo, se interesan en adquirir grandes propiedades en África.

Con información de http://www.commondreams.org/headline/2009/04/20-3, "Huge Congo land deal for South Africa's farmers" y "Saudi Investors Eye Leasing Tanzanian Farmland", Reuters, 15 y 16 de abril, respectivamente

* (ver "¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008, http://www.grain.org/briefings/?id=214),

Declaración del Monte Kenya

La crisis global y la responsabilidad de África

Entre el 23 y el 31 de mayo de 2009, la Red Africana por la Biodiversidad [African Biodiversity Network-ABN] reunió, cerca del Monte Kenya, a 25 organizaciones de diez países que trabajan con campesinos y comunidades locales en biodiversidad, soberanía alimentaria, modos de vida, cambio climático, saberes tradicionales, cultura y derechos comunitarios en África.

Estamos profundamente conscientes de que el planeta enfrenta múltiples crisis interconectadas que tendrán un impacto todavía mayor en África, aunque África no sea responsable de estas crisis.

El agudo y devastador impacto de las crisis financiera y alimentaria se conjuntará con el impacto del cambio climático, y nos preocupan los efectos que esta conjunción está teniendo sobre los pueblos de África y su entorno. La gente pierde sus modos de vida, sus casas y sus empleos a ritmo alarmante, mientras los campesinos, los pastores y las comunidades locales tienen que enfrentar cambios impredecibles en su ambiente. Concordamos con los pueblos indígenas que en la declaración de Anchorage, de abril de 2009, afirman que la Tierra ya no está en un periodo de cambio climático, sino de crisis climática.

Estamos furiosos con la crisis financiera que fue provocada por las instituciones financieras globales por su inimaginable acumulación de riqueza al especular con los ahorros duramente reunidos por la gente común. Este desplome económico deja ahora a muchos países en condiciones deplorables y añade otros 104 millones de personas a los mil millones de hambrientos permanentes en el mundo.

Estamos también conscientes de que la crisis de alimentos y las hambrunas recurrentes en África no son algo nuevo. Son algo ocasionado por injusticias estructurales básicas, incrustadas por décadas, y que ahora provocan nuevos niveles de privación por el especulativo comercio con los alimentos en los mercados internacionales.

Para nosotros es intolerable la escala actual del "capitalismo de crisis". Rechazamos tajantemente el cinismo de las corporaciones que ponen su mira en explotar África aún más —aprovechando las oportunidades económicas que las crisis climática y alimentaria provocan— en vez de intentar resolver estas crisis.

Es claro que la causa subyacente de las crisis es la globalización del sistema industrial, que inevitablemente resulta en la concentración de capital y de poder en manos de unos cuantos, lo que genera una pobreza creciente y una devastación ecológica que tiene como efecto el cambio climático global. Ahora, este mismo pensamiento que produjo estas numerosas deudas tóxicas promueve muchas "falsas soluciones" que sólo exacerban las crisis. Hay una intensa rebatinga por la tierra y la riqueza ecológica de África, y la facilitan los gobiernos —que continúan dominados por los intereses corporativos. Rechazamos entonces estas falsas soluciones entre las que se hallan:

- **Los organismos genéticamente modificados (OGM)**, que nos venden diciendo que van a remediar el hambre y el cambio climático. Los OGM han provocado una contaminación de los cultivos agrícolas y de nuestros alimentos que está sumamente extendida, e incrementan el uso de plaguicidas destructores de la biodiversidad y la salud. El fin último de las compañías productoras de OGM es controlar nuestras semillas y como tal el sistema alimentario, a través del patentamiento de todas las formas de vida. Estos cultivos requieren condiciones de cultivo muy industrializadas, lo que libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera y son uno de los factores importantes que contribuyen al cambio climático. Pese a esto, quienes proponen los OGM alegan que pueden hallar remedios genética-



mente modificados para el cambio climático y para la crisis de alimentos.

- **AGRA (Como se le conoce a la nueva Revolución Verde en África)** es un proyecto que nos está siendo impuesto en África por el esfuerzo de colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y las agroindustrias, entre otros actores, que intentan reemplazar las semillas, los cultivos y los saberes de África, por híbridos, OGM, fertilizantes y plaguicidas. Como el sistema industrial requiere grandes extensiones de tierra, AGRA financia también la puja por cambiar los sistemas de tenencia de la tierra: busca privatizar la tierra alterando lo que fue una tierra bajo la custodia comunal para convertirla en tierra que es mercancía para llenar los bolsillos de los inversionistas. Las contundentes cantidades de dinero e influencia política que están detrás de la Revolución Verde y le dan vuelo, dominan ahora el debate relativo a la agricultura e impulsan derechos más estrictos de propiedad intelectual sobre las semillas, y una débil legislación en bioseguridad. Esto estrecha las opciones con que cuenta África para lograr una soberanía alimentaria a nivel local y a nivel de sus naciones.

- **Los agrocombustibles (o biocombustibles)** son promovidos por los países del norte como la solución al cambio climático, cual si fueran una alternativa a los combustibles fósiles. Pero eso está disparando un acaparamiento sin precedentes por toda África, lo que conduce a expulsiones forzadas, deforestación y aumento en los precios de los alimentos. Impugnamos el mito, difundido por las corporaciones y los gobiernos corruptos, de que hay mucha tierra libre, disponible, en África. Nosotros en nuestro continente sabemos de los retos y los conflictos que debemos enfrentar al tener que competir por la tierra y el agua. Otras tantas supuestas soluciones al cambio climático sólo crean más oportunidades para hacer negocios, incluidos el biochar, el comercio del carbono y la geoingeniería.

Es claro que estas soluciones propuestas por las corporaciones se basan en adquirir enormes extensiones de tierra y mano de obra barata para su producción de escala industrial, lo que sirve tan sólo para mantener los excesivos modos de vida de las sociedades de consumo y exacerba las crisis tanto en el Norte como en el Sur. Todos estos proyectos alegan ser portadores de progreso para África. Pero no sólo no podrán responder con soluciones al hambre y el cambio climático, los harán peores. Estas falsas soluciones reflejan el cínico intento de las corporaciones por llegar a nuevos mercados y por hacer de las crisis un negocio.

La postura de ABN. ABN considera que las soluciones al cambio climático y al hambre son la misma: comunidades saludables y flexibles que dependan de una biodiversidad en ecosistemas flexibles.

Estamos seguros que es crucial que los ecosistemas sean saludables y biodiversos, que mantengan un clima estable, algo que con frecuencia se pasa por alto en la mayoría de las predicciones y discusiones acerca del cambio climático. Cuando lidiamos con el cambio climático, debemos reducir nuestras emisiones de carbono, pero es igualmente importante que también impulsemos la biodiversidad. Sólo se obtienen suelos saludables con una agricultura ecológica y con sistemas de vida que capten carbono y tengan al mismo tiempo mayor capacidad de retener agua en tiempos de sequía o inundación.

La soberanía alimentaria a nivel local y nacional requiere cultivos localmente adaptados, una diversidad de animales y sistemas de tenencia de la tierra que permitan que las comunidades produzcan y comercien los alimentos en modos que realmente alimenten a la gente, que promuevan equidad y al mismo tiempo remedien la inestabilidad climática.

Consideramos también que debemos reavivar y fortalecer urgentemente todos los sistemas de gobernanza y saberes ecológicos locales e indígenas, si pretendemos maximizar la capacidad de África para leer, anticipar y adaptarse al cambio climático.

Ha llegado el momento de que los gobiernos nacionales prioricen la regeneración de los ecosistemas, la autogestión de las comunidades y la diversificación de las economías locales, en lugar de promover políticas orientadas a la exportación, acuerdos de libre comercio y la actual ola de expansión del sistema alimentario.

África debe tener el valor de liberarse a sí misma de su legado colonial y construir a partir de su rica herencia, reviviendo la sabiduría de su gente. Ésta es su responsabilidad con las generaciones pasadas y futuras. Si basa su acción en esta riqueza, tendrá la capacidad de buscar soluciones reales y se podrá zafar del modo de pensar que fue el que provocó las crisis.

Aquí, en el lugar de nacimiento de la especie humana, las comunidades africanas se adaptaron y evolucionaron por más de mil años, sin destruir el sistema que impulsó su vida. África necesita reivindicar su responsabilidad y su herencia, e impulsar desde éstas un futuro viable para todos.

Red Africana por la Biodiversidad

Biochar: ponerle gasolina al fuego

El 6 de abril de 2009 se lanzó una declaración internacional que firmaron 147 organizaciones de 44 países, todas organizaciones que se oponen a la "creciente tendencia y apoyo político que se está dando al carbón vegetal hoy llamado "biochar" (acrónimo de "biological charcoal", carbón biológico). "Los grupos firmantes de la declaración", dice un boletín de prensa de Econexus, el Grupo de Reflexión Rural y Biofuelwatch, "se oponen decididamente a la inclusión de los suelos en el comercio de carbono y en mecanismos de compensación, incluyendo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Los grupos afirman además que 'la propuesta del biochar no toma en cuenta las verdaderas causas en las que radica el cambio climático'". Los firmantes van de comunidades de campesinos a organizaciones "que trabajan por la protección de los bosques, redes ambientales internacionales y defensores de derechos humanos" y la declaración contínua abierta para que más organizaciones se unan con su firma.



La declaración lleva por título *Biochar, una nueva amenaza para los pueblos, la tierra y los ecosistemas* y fue lanzada para que coincidiera con una reunión en Bonn entre delegados de la ONU y gobiernos, para discutir un acuerdo post-2012 sobre el cambio climático. "Una de las propuestas que se discutió, es la posibilidad de que se concedan créditos de carbono para el uso de carbón vegetal como aditivo de suelos, con el argumento de que esto creará un sumidero de carbono permanente que contribuiría a reducir el calentamiento global, y a la recuperación de suelos degradados. También se analizó la posibilidad general de incluir los suelos agrícolas en el mercado del carbono. (Los gobiernos de Belice, Gambia, Ghana, Lesotho, Micronesia, Mozambique, Níger, Senegal, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, han solicitado la inclusión del biochar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, es decir, en el comercio de carbono. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación también apoya esta petición.)"

En realidad muchos grupos de la sociedad civil hacen un llamado a la prudencia en torno al biochar por la gran incertidumbre científica que entraña, y que sus promotores maquillan de varios modos. Hay mucha gente preocupada porque "esta tecnología podría tener como consecuencia la conversión de amplios territorios en nuevas plantaciones, repitiendo la serie de desastres provocados por los agrocombustibles. Destacan que los incentivos financieros a gran escala para el biochar podrían resultar en la reconversión de los usos de la tierra a gran escala y en el desplazamiento de personas".

Helena Paul de EcoNexus afirma que: "La inclusión del biochar y de los suelos agrícolas en los mercados haría de los suelos una mercancía que podría ser vendida para compensar la contaminación en otros lugares. Se pondría en peligro a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas que no pueden competir con gobiernos ni con grandes empresas y correrían el riesgo de ser desplazados de sus territorios si estos son literalmente vendidos bajo sus pies".

Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural de Argentina agrega: "La idea de que el carbón vegetal rescatará al planeta en llamas es absurda. Algunos defensores de biochar hablan de cantidades de carbón vegetal que requerirían más de 500 millones de hectáreas de cultivos industriales de árboles y plantaciones. Ya sabemos que la agricultura industrial y las plantaciones de árboles son una importante causa del cambio climático y del desplazamiento de poblaciones y biodiversidad. Lo que tenemos que hacer es proteger los ecosistemas, y ¡no plantar nuevos enormes monocultivos y luego quemarlos! Es una farsa".

A fin de cuentas, el famoso biochar que supone desarrollar extensas plantaciones de árboles para después quemar su biomasa hasta convertirla en carbón, y luego enterrarla —lo que supuestamente "secuestra carbón hacia el suelo y le incrementa la fertilidad", es una extrapolación bastante aventurada de las prácticas ancestrales de ciertos pueblos amazónicos que durante milenios han promovido mayor fertilidad de sus suelos con carbón (la llamada "terra preta" o "tierra oscura"). Pero les llevó milenios el proceso. En cambio, lo que ahora se propone, con gran ignorancia e irresponsabilidad, es extremar la intensidad del proceso (y su escala) para hacerlo "viable" en pocos meses, o semanas, o de manera instantánea. Es decir, el biochar termina siendo uno más de los experimentos industriales, en este caso muy violento y sumamente nocivo, que promueve el monocultivo, los fertilizantes, la homogenización de la biodiversidad y la expulsión de campesinos de sus tierras para supuestamente mitigar el cambio climático con más calor. Como ponerle gasolina al fuego.

Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Las organizaciones populares, las ONG y las instituciones de América Latina pueden recibirla gratuitamente. Por favor envíen sus datos con la mayor precisión posible para simplificar la tarea de distribución de la revista.
Los datos necesarios son:

País, organización, nombre y apellido, dirección postal: código postal, ciudad, provincia, departamento o estado.
(Correo electrónico, teléfono y/o fax, si se cuenta con ellos.)

Envíen por favor su solicitud a BIODIVERSIDAD, REDES-AT Uruguay, San José 1423, 11200, Montevideo, Uruguay. Teléfonos (598 2) 902 23 55/908 2730.
biodiv@redes.org.uy / http://www.grain.org/suscribe

Este número de Biodiversidad Sustento y Cultura es una publicación conjunta con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC)


REDES


GRAIN






etc
group


Campaña
de la Semilla


LA VIA
CAMPESINA


ECOLOGICO


acción por la biodiversidad • acción por la biodiversidad •


red de coordinación en
biodiversidad